

IIª SESIÓN ORDINARIA, EL 9 DE JUNIO DE 1902

PRESIDENCIA DEL SEÑOR BENITO VILLANUEVA

SUMARIO:—Asuntos entrados.—Consideración de las modificaciones del senado al proyecto de ley autorizando al poder ejecutivo á contriuir á los gastos que origine la exposición de lechería que realizará la sociedad rural.—Se concede licencia para faltar á varias sesiones á los señores diputados Vicente D. Loveyra y Gustavo Ferrari.—Proyecto de ley del señor diputado Juan A. Martínez, sobre organización de la justicia criminal y correccional.—Aprobación del dictamen de la comisión de códigos en el proyecto de ley prohibiendo los juegos de azar.

DIPUTADOS PRESENTES

Acuña, Aldao, Alfonso, Amenedo, Argañaraz, Argerich, Astrada, del Barco, Barraquero, Barraza, Barroetaveña, Benedit, Bertrés, Berrondo, Billordo, Bollini, Bores, Bustamante, Campos, Capdevila, Carbo, Carlés, Carreño, Castro, Centeno, Cernadas, Comaleras, Cordero, Coronado, Dantas, Demaría, Domínguez, Drago, Echegaray, Fonseca, Galiano, Garzón, Gigena, González Bonorino, Gouchon, Guevara, Helguera, Iriondo (M.), Lacasa, Lagos, Leguizamón (G.), Leguizamón (L.), Lucero, Luna, Luro, Martínez (J. A.), Mujica, Naón, Olivera, Orma, Ovejero, Padilla, Palacio, Peña, Pérez (E. S.), Pinedo, Posse, Quintana, Robert, Roldán, Romero (G. I.), Romero (J.), Rosas, Salas, Sarmiento, Sastre, Seguí, de la Serna, Sibilat Fernández, Silva, Soldati, Torino, Torres, Ugarriza, Uriburu, Urquiza, Varela, Varela Ortiz, Vedia, Victorica, Villanueva (B.), Villanueva (J.), Vivanco (P.), Vivanco (R. S.), Yofre, Zavalla.

CON LICENCIA

Ferrari, Iriondo (U.), Lacavera, Loveyra, Luque, Olmos.

CON AVISO

Balaguer, Castellanos, Contte, Fonrouge, Gallino, Martínez Rufino, Pérez (B. E.), Tissera.

SIN AVISO

Avellaneda, Balestra, Casares, Gómez, Laferrere, Martínez (J.), Martínez (J. E.), Parera, Rivas.

—En Buenos Aires, á 9 de junio de 1902, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados arriba anotados, el señor presidente declara abierta la sesión, á las 3 y 10 p. m.

ACTA

—Se lee y aprueba la de la sesión anterior.

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

—El señor presidente del honorable senado comunica que ha sido electo el señor senador José E. Uriburu para el cargo de vicepresidente 1.º y el señor senador Doncel para el de vicepresidente 2.º de aquel cuerpo.—(Al archivo).

EXPOSICIÓN DE LECHERÍA

—El mismo devuelve modificado el proyecto destinando 30.000 pesos para la próxima exposición de lechería.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra. Para hacer moción á fin de que este asunto sea considerado sobre tablas. Las únicas modificaciones introduci-

por la comisión y merece los honores del debate, daré entonces mayores explicaciones para sostenerlo cuando la oportunidad llegue. (*Muy bien!; muy bien!*)

—Suficientemente apoyado, se destina á la comisión de justicia.

ORDEN DEL DIA

Sr. Presidente—No habiendo más asuntos entrados de quedar cuenta, se pasará á la orden del día.

JUEGOS DE AZAR

A la honorable cámara de diputados.

La comisión de códigos ha estudiado el proyecto de ley presentado por el señor diputado Rufino Varela Ortiz, prohibitivo de los juegos de azar, y por las razones que aducirá su miembro informante, tiene el honor de aconsejaros su sanción, con las modificaciones introducidas en el siguiente

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º Desde la promulgación de la presente ley, quedan prohibidos los juegos de azar en la capital de la República y territorios nacionales como así mismo todo contrato, anuncio, introducción y circulación de cualquier lotería que no se halle expresamente autorizada por ley de la nación.

Art. 2.º Pagarán una multa de mil pesos moneda nacional, ó en su defecto sufrirán un arresto de seis meses por cada infracción, y en caso de reincidencia una y otra conjuntamente:

- a) Las personas que tuvieran una casa de juegos de azar en que se admita al público, sea libremente, sea por presentación de los interesados, afiliados ó socios.
- b) Los administradores, banqueros y demás empleados de la casa, cualquiera que sea la categoría del empleado.
- c) Las personas que participaren del juego ó que la autoridad policial sorprendiera en el interior de una casa de las comprendidas en el presente artículo.

Art. 3.º Pagarán una multa de 2000 pesos moneda nacional ó en su defecto arresto por un año:

- a) Las personas que en cualquier sitio y bajo cualquier forma explotaren apuestas sobre carreras de caballos, juegos de pelota, billar, juegos de destreza en general ó otros permitidos por la autoridad, ya sea ofreciendo al público apostar ó apostando con el público directamente ó por intermediario.
- b) Los dueños, gerentes ó encargados de los locales donde se vendan ó se ofrezcan al público boletos de apuestas mutuas ó se facilite en cualquier forma la realización de tales apuestas.
- c) Los que se encarguen de la compra ó colocación de boletos de apuestas fuera del recinto de los hipódromos.

Art. 4.º Incurrirán en las mismas penas:

- a) El que hubiere establecido loterías no autorizadas por ley nacional ó tuviere en su poder los billetes de loterías clandestinas emitidas dentro ó fuera del país;
- b) Los administradores, propietarios, agentes ó empleados de casas donde se vendan ó se encuentren billetes de loterías no autorizadas;
- c) Las personas que por medio de avisos, anuncios, carteles ó todo otro medio de publicidad hicieran conocer la existencia de esas loterías;
- d) Los que publicaren ó presentaren al público sus extractos;
- e) Los que introdujeran á la capital de la República ó territorios nacionales billetes de loterías no autorizadas ó de cualquier manera los circularan ó exhibieran.

Art. 5.º Los que establecieren ó tuvieran en las calles, caminos, plazas ó lugares públicos juegos de lotería ó otros de azar en que se ofrezcan al juego sumas de dinero, cualquiera que sea su cantidad ó objetos de cualquier naturaleza, pagarán una multa de 100 pesos moneda nacional ó en su defecto sufrirán treinta días de arresto.

Art. 6.º En todos los casos serán secuestrados los fondos y efectos que se encontraren expuestos al juego: los muebles, instrumentos, utensilios y aparatos empleados ó destinados al servicio de juegos de azar ó loterías no autorizadas.

Los billetes y extractos de estas loterías, ya jugadas ó á jugarse, serán destruidos el día mismo del secuestro, con intervención de los empleados que designe la administración de la lotería nacional.

Art. 7.º Ningún campo de carreras podrá ser abierto al público sin la autorización del poder ejecutivo, que sólo permitirá las carreras de caballos que tengan por fin exclusivo la mejora de la raza caballar y sean organizadas por sociedades cuyos estatutos sociales hubieren sido previamente aprobados.

Art. 8.º Las sociedades que hubieren llenado las condiciones prescriptas por el artículo anterior podrán, mediante el pago de la patente que fije la ley respectiva, organizar la apuesta mutua dentro del recinto de sus campos de carrera, exclusivamente.

Art. 9.º El jefe de policía someterá al juzgamiento de los jueces correccionales á los infractores de la presente ley; y munidos de órdenes, subscriptas por él, los funcionarios de policía podrán penetrar á las casas en que se verifiquen juegos de azar, se vendan ó se ofrezcan en venta billetes de loterías no autorizadas ó se celebren apuestas ó vendan boletos de sport, toda vez que existiera la semiplena prueba de que en ellas se infringen las disposiciones de esta ley y al sólo objeto de constituir en arresto á los contraventores y verificar el secuestro á que se refiere el artículo 6.º

Art. 10. Los infractores de la presente ley no podrán acogerse á los beneficios de la libertad provisoria bajo caución establecida en el artículo 376 del código de procedimientos en lo criminal; y si el infractor fuese empleado público sufrirá además la pérdida del empleo ó inhabilitación por tres años para ocupar puestos públicos.

Art. 11. El importe de las multas que se impongan en virtud de la presente ley se destinará al sostenimiento de las sociedades de beneficencia de la capital de la República y territorios nacionales que el poder ejecutivo haya declarado comprendidas en los beneficios de la lotería nacional.

Junio 9 de 1902

CÁMARA DE DIPUTADOS

11.^a sesión ordinaria

Art. 12. Quedan derogados los incisos 13, 14 y 15 del artículo 3.º y el artículo 35 de la ley de patentes.

Art. 13. Comuníquese al poder ejecutivo.

Salta de la comisión, junio 2 de 1902.

Juan Antonio Argerich.—T. S. de Bustamante.—F. Helguera.—A. Leguizamón.

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º Desde la promulgación de la presente ley quedan prohibidos los juegos de azar en la capital de la República y territorios nacionales, como asimismo la introducción, circulación y venta de toda otra lotería que no se halle expresamente autorizada por el congreso.

Art. 2.º Pagarán una multa de mil pesos moneda nacional ó en su defecto sufrirán arresto por seis meses por cada infracción, y en caso de reincidencia uno y otra conjuntamente:

- a) Las personas que tuvieran una casa de juegos de azar en que se admita al público, sea libremente, sea por presentación de los interesados, afiliados ó socios;
- b) Los administradores, banqueros y demás empleados de la casa, cualquiera que sea su categoría;
- c) Las personas que participaren del juego ó que la autoridad policial sorprendiera en el interior de una casa de las comprendidas en el presente artículo;
- d) Los que hubieren establecido loterías no autorizadas por ley nacional ó tuvieran en su poder los billetes de loterías clandestinas emitidas dentro ó fuera del país;
- e) Los administradores, propietarios, agentes ó empleados de casas donde se vendan ó se encuentren billetes de loterías no autorizadas;
- f) Las personas que por medio de avisos, anuncios, carteles ó todo otro medio de publicidad hicieran conocer la existencia de esas loterías;
- g) Los que publicaren ó presentaren al público sus extractos;
- h) Los que introdujeran á la capital de la República ó territorios nacionales billetes de loterías no autorizadas ó de cualquier manera los circularan ó exhibieren.

Art. 3.º Los que establecieren ó tuvieran en las calles, caminos, plazas ó lugares públicos juegos de lotería ú otros de azar en que se ofrezcan al juego sumas de dinero, cualquiera que sea su cantidad, ú objetos de cualquier naturaleza, pagarán una multa de 100 pesos moneda nacional ó en su defecto treinta días de arresto.

Art. 4.º Los infractores al artículo anterior no podrán acogerse á los beneficios de la libertad provisoria bajo caución establecida en el artículo 376 del código de procedimientos civil.

Art. 5.º En todos los casos serán secuestrados los fondos y efectos que se encontraren expuestos al juego: los muebles, instrumentos, utensilios y aparatos empleados ó destinados al servicio de juegos de azar ó loterías no autorizadas.

Los billetes y extractos de loterías ya jugadas ó á jugarse serán destruidos el día mismo del secuestro, con intervención de los empleados que designe la administración de la lotería nacional.

Art. 6.º Pagarán una multa de 2000 pesos moneda nacional ó, en su defecto, arresto por un año:

- a) Las personas que en cualquier sitio y bajo cualquier forma explotaren apuestas sobre carreras de caballos, juegos de pelota, billar, juegos de destreza en general ú otros permitidos por la autoridad, ya sea ofreciendo al público apostar ó apostando con el público directamente ó por intermediario;
- b) Los dueños, gerentes ó encargados de los locales donde se vendan ó se ofrezcan al público boletos de apuestas mutuas ó se facilite en cualquier forma la realización de tales apuestas;
- c) Los que se encarguen de la compra ó colocación de boletos de apuestas fuera del recinto de los hipódromos.

Art. 7.º Ningún campo de carreras podrá ser abierto al público sin la autorización del poder ejecutivo, que sólo permitirá las carreras de caballos que tengan por fin exclusivo la mejora de la raza caballar y sean organizadas por sociedades cuyos estatutos sociales hubieren sido previamente aprobados.

Art. 8.º Las sociedades que hubieren llenado las condiciones prescriptas por el artículo anterior, podrán, mediante el pago de la patente que fije la ley respectiva, organizar la apuesta mútua dentro del recinto de sus campos de carrera, exclusivamente.

Art. 9.º El jefe de policía someterá al juzgamiento de los jueces correccionales á los infractores de la presente ley; y munidos de órdenes, subscriptas por él los funcionarios de policía podrán penetrar á las casas en que se verifiquen juegos de azar, se vendan ó se ofrezcan en venta billetes de lotería no autorizadas ó se celebren apuestas, ó vendan boletos de sport, toda vez que existiera la semiplena prueba de que en ellas se infringen las disposiciones de esta ley y al sólo efecto de constituir en arresto á los contraventores y verificar el secuestro á que se refiere el artículo 4.º

Art. 10. El importe de las multas que se impongan en virtud de la presente ley, se destinará al sostenimiento de las sociedades de beneficencia de la capital de la República que el poder ejecutivo haya declarado comprendidas en los beneficios de la lotería nacional.

Art. 11. Comuníquese, etc.

Mayo 16.

R. Varela Ortiz.

Sr. Presidente—Está en discusión en general.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Encargado, señor presidente, de informar sobre este proyecto de ley, pienso hacerlo, en general, con muy pocas palabras: en primer término, porque después del brillante y erudito discurso con que fué fundado, poco podría agregar al respecto; y, por otra parte, porque informar en general sobre este asunto es informar sobre el juego. Entrar en una disertación contra él, me parece fuera de lugar, desde que al fin y al cabo todo lo que á este respecto podría decirse sería casi una glosa de aquellos versos de la epístola famosa de Horacio en que lo condenó hace tantos años.

La comisión de códigos ha dado preferente despacho á este asunto porque es el primero que le ha ido en este año; y, en segundo lugar, porque no obstante haber estudiado antes de despachar éste, los proyectos debidos á la iniciativa de varios diputados, como el del señor Lacasa entrado el año anterior, ha creído que no debía dar á la cuestión alcance de reforma legislativa muy extendida y se concretó á no demorar ni por un momento la sanción de estos preceptos que, por lo menos, para la capital federal y territorios nacionales, son de urgencia positiva, porque el juego asume las proporciones de un cáncer social, no siendo tampoco necesario que haga referencias á espectáculos recientes, que las autoridades policiales, judiciales y administrativas han tenido que librar verdaderas batallas para poder clausurar, sin conseguirlo en definitiva, antros del juego establecidos en las partes más centrales de la ciudad.

No es posible que las cosas continúen como están en el presente. El juego es una dispersión positiva de la energía nacional; el juego cunde, repito, como un cáncer y todo lo que las sociedades civilizadas fundan en el poder de la economía, en la lenta acción del dinero acumulado como un resultado del trabajo honesto de una vida, desaparece ante esta tentación permanente que el juego ofrece para los vecinos de la ciudad en todas las formas imaginables é inimaginables también.

Acaso, señor presidente, se podría decir que hay un poco de falta de lógica en el despacho cuando empieza por reprimir modalidades del juego y no encara una de las formas más graves del mismo en la República: me refiero á la lotería nacional.

Tengo mi espíritu lleno de prevenções en contra de semejante institución. Creo que la fórmula ideal de una legislación política previsor, en cuanto á esta materia se refiere, es por ejemplo el precepto del artículo 55 de la constitución suiza, que prohíbe en aquel estado la extracción de toda lotería.

En la República misma tenemos en la provincia de Buenos Aires el ejemplo de una constitución que ha escrito entre sus preceptos fundamentales la condenación absoluta del juego de lotería. Pero hay momentos en que no puede el legislador llenar ampliamente todos sus deseos por imposibilidades materiales. Si fuese necesario traer ejemplos extranjeros, recordaría á Italia que no

ha podido reprimir, por razones de su hacienda, el juego de lotería, siendo aspiración de todos sus políticos y de todos sus sociólogos la represión de semejante vicio; podría traer el ejemplo de algunos otros países para demostrar que no siempre es posible realizar de la noche á la mañana un deseo semejante, por generoso que sea.

La institución de la lotería entre nosotros—perdóneseme la observación—es una prueba más de nuestra imprevisión; hemos expuesto á lo adventicio de la venta de billetes de lotería nada menos que la contribución del pago de aquello que constituye la necesidad primordial de una sociedad civilizada. En vez de empezar por preceptuar en los presupuestos recursos para que del fondo común de las contribuciones salga el pago de lo que se debe emplear en obras de caridad, en obras de beneficencia, lo hemos supeditado á las contingencias posibles de la mayor ó menor venta de los billetes de lotería, y el resultado es que continuamente tiene el gobierno, porque no da resultados la extracción de loterías, que apelar á sus recursos subsidiariamente para pagar aquello que resulta deficiente y escaso en cuanto á la provisión de la lotería misma.

La comisión de códigos, señor presidente, por otra parte, compuesta de hombres de alguna preparación profesional, pero no de especialistas, ni mucho menos, en materia de finanzas, no podía tomar sobre sí la responsabilidad de aconsejar la derogación inmediata de la ley de lotería nacional si no podía traer al mismo tiempo los recursos con los cuales se había de pagar aquellos gastos extraordinarios costeados con el producido de la lotería. Es una tarea que incumbe á los poderes públicos, y especialmente al poder ejecutivo nacional que nos remite el presupuesto, buscar á la brevedad posible la forma de que este cáncer social desaparezca.

He informado más extensamente de lo que debía hacerlo esta ley de reglamentación de detalles. En nombre de la comisión, si fuere necesario, iré dando las razones que han inducido á ésta á adoptar algunos artículos, modificando ligeramente algunos otros, y me pongo á disposición de mis colegas para cualquier explicación que deseen.

Debo también hacer una indicación final. No será difícil que algunos compañeros de comisión tengan que propo-

ner ciertas pequeñas modificaciones de detalle, y de antemano manifiesto que por mi parte tal vez no haré objeciones mayores.

He terminado este informe y creo que la cámara pueda sancionar en general el proyecto. (*¡Muy bien! ¡muy bien!*)

Sr. Lacasa—Pido la palabra.

Cuando recibí la orden del día me llamó mucho la atención que no se hubiera incluido en el estudio de la comisión los proyectos que se habían presentado con anterioridad sobre esta materia.

El año anterior yo había presentado un proyecto á este respecto y el poder ejecutivo había mandado otro. No era extraña, pues, la sorpresa que me produjo el recibo de la orden del día en esta forma.

Debo manifestar á la honorable cámara ante todo que no es por razones de amor propio, absolutamente, que me haya preocupado esta resolución de la comisión; pero creo que es un derecho de cada uno de los diputados que se sientan en este recinto, que cuando se presenta un proyecto á la consideración de la cámara y esta lo pasa á una comisión, por lo menos a comisión debe estudiarlo con la anterioridad que ha tenido ó hacer alguna mención de él.

El honorable presidente de la comisión de códigos me ha explicado las razones por que lo ha hecho. No quiero hacer cargos á la comisión porque me basta con las explicaciones personales que me ha dado su presidente en este caso; pero quiero que quede constancia para el futuro, de que un proyecto presentado por un diputado no puede ser desestimado por la comisión, que debe considerarlo ya sea aceptándolo, rechazándolo ó modificándolo.

Si esto ha sucedido por causa de la secretaría, de la presidencia ó de la comisión, no me importa absolutamente, porque me basta con las explicaciones que se me han dado.

Dejando á salvo, no lo referente á ni persona, sino al fuero de los diputados, voy á manifestar que no teniendo en este asunto otra idea ni propósito que no sea el de legislar sobre el punto de que se trata, voy á votar en general el proyecto; y al tratarse en particular, si tengo que hacer algunas indicaciones de acuerdo con mi proyecto, las haré, dejando á salvo este principio que no podía dejar sin que la cámara lo conociera.

Nada más tengo que decir.

Sr. Olivera—Pido la palabra.

Voy á votar por este proyecto, pero sin entusiasmo

De todas las disposiciones que afectan el carácter de leyes, no se puede decir que tengan la naturaleza de leyes. Una de ellas es la que tenemos á estudio en este momento.

Hay una cantidad de declives del espíritu humano sobre los cuales no se puede legislar, porque no hay sanción posible. Se necesitaría disponer de elementos inmensos para obligar á las gentes, por ejemplo, á que no les gustara lo que sus naturalezas les lleva á preferir: para que no amaran, para que no prefirieran el placer al dolor, para que no codiciaran, aun las cosas que la biblia nos manda no codiciar... (*Risas*).

En realidad, y esto no es una paradoja, no hay juegos de azar. Todos los juegos son simplemente procedimientos que el hombre adopta para despojar á sus semejantes. (*Risas*).

Y naturalmente, no todos los hombres juegan al mismo juego. (*Risas*). Una evidente filtración lleva á los más tigres á jugar con los más tigres, en los campos más reservados, allí donde por una serie de tradiciones y de premeditaciones no puede entrar la policía, ni sería discreto que la sociedad entrara tampoco. (*Risas*).

Si no se puede legislar sobre los tigres, es fácil demostrar que tampoco se puede legislar sobre los que no son tigres.

Los medios de que se valen unos y otros son de aquellos que casi, casi no interesan al estado, y están reservados, como dice la constitución, al conocimiento de Dios.

¿Por qué no intervenimos en la bolsa? También allí se juega. ¿Por qué no le privamos al estado que juegue? ¿No está jugando á la lotería? ¿Esta sería, entonces, una ley para privilegiar su capacidad de despojar al público por medio de una lotería?

Sería más lógico aceptar las cosas como son, es decir, al hombre como es, y sólo ocuparse de aquellos actos que chocan directamente con los derechos que mutuamente nos hemos reconocido, porque son los únicos que podemos realizar por una sanción.

¿En qué parte no se juega? Puede decirse que es juego todo en la vida. El noviazgo es un juego... (*risas*). El matrimonio... (*grandes risas en la barra*) es otro, sin ser juego de azar.

La guerra es otro juego. ¿Y la política?

ca? Hay promesas que no significan nada en la política, lo mismo que en la mesa de juego. Todo es materia de habilidad y de oportunidad. Así, no se expone en la mesa de juego de los tigres (*risas*) el que no tiene capacidad para estar con ellos.

Una selección rigurosa determina la composición de las mesas de juego, en la ruleta, en los negocios, en el comercio, en los partidos políticos, y ¿por qué no decirlo de una vez? hasta de ese partido político que se llama Iglesia, en donde tienen lugar los juegos de menos azar que hay en el mundo... porque son los más calculados. (*Grandes risas y aplausos*).

El humorista norteamericano Mark Twain tiene un cuento que bajo su aparente superficialidad, oculta una profundidad inmensa.

Había, dice, en una aldea americana un abogado que jamás perdió ningún pleito. Se le habían presentado ocasiones de inmenso peligro para su reputación. Los abogados que le hacían competencia, se ingeniaban siempre para mandarles aquellos casos que consideraban más perdidos; se habían hasta puesto de acuerdo, en muchas ocasiones, y habían impulsado á los clientes á que buscaran su concurso. Nunca, sin embargo, había salido mal.

Una vez la policía tomó á varios jugadores de monte; y los que tenían interés en abrir brecha en la reputación del abogado, se pusieron nuevamente de acuerdo y se los mandaron á que lo solicitaran.

El abogado aceptó inmediatamente el defenderlos, y entonces sus competidores se creyeron salvados. Dijeron: «Al fin lo hemos pescado en un momento inoportuno! La ley dice: juego de azar; estos hombres han sido tomados infraganti, han confesado; ahí están las fichas, las cartas, los testigos; no hay absolutamente nada que hacer: estos individuos serán condenados y el abogado habrá perdido su reputación de invencible.»

Llegado el momento de juzgar el asunto, el juez dió cuenta de la acusación y preguntó al abogado si tenía alguna cosa que decir, algún testigo que invalidar.

El abogado dijo: «No, señor; todo está probado; pero la ley no se puede aplicar en este caso, porque el monte no es un juego de azar, el monte es un juego científico.» (*Risas*).

Como los jueces no se convencieran,

el abogado les propuso que realizaran una partida de monte con cualquiera de los clientes... (*Risas*). Y habiendo ellos aceptado, volvieron al poco rato... y los pusieron en libertad. (*Risas*).

Ahora ¿contra qué juego de azar se va con esta ley? ¿Contra el azar de la capacidad de los jugadores? Sería una ingenuidad, porque nadie juega sino á aquel juego que le parece más conveniente, siempre con el objeto de aumentar su peculio á expensas de sus semejantes. (*Risas*). Es la ley de la vida.

Yo quería simplemente dejar fundado mi voto á favor del proyecto con estas reservas, porque no quiero dejar de figurar en un ensayo de moralidad pública... Aunque me parece completamente superficial, porque no se juega sino cuando no se puede trabajar, y no se trabaja cuando atravesamos una situación como la actual. Si todo el mundo tuviera en qué trabajar, nadie jugaría. El juego ha aumentado cuando el trabajo ha disminuido. Nada más.

Un sentimiento de cortesía por mi distinguido colega el diputado Varela Ortiz y el deseo que tengo de no figurar contrariando este ensayo de ingenuidad, me llevan á prestarle mi voto. (*Risas*).

Sr. Pérez (E. S.)—Pido la palabra.

El proyecto en discusión, preparado por uno de los diputados más laboriosos é inteligentes de esta cámara, llena sin duda alguna el propósito que se ha tenido al formularlo: creo que es completo y previsor, dentro de su pensamiento; pero obediendo á ideas perfectamente arraigadas en mi espíritu, me veo en la imposibilidad de darle mi voto, por no coincidir ellas con el pensamiento del proyecto.

No creo necesario para combatirlo haber presentado en la secretaría de la cámara un proyecto en substitución, porque si llegara á convencerme de que el espíritu de la cámara coincide con el mío, lo haría inmediatamente.

Aquí se dice, señor presidente, por la comisión, y se repite en el texto mismo del proyecto, que es prohibitivo de los juegos de azar; y por más que he tratado de convencerme de que eso fuera exacto, he adquirido, al contrario, la persuasión de que se trata únicamente de un proyecto reglamentario de los juegos de azar; porque se llama, en mi concepto, reglamentar, establecer que el mismo hecho en ciertas circunstancias puede ser considerado como legal y en

otras circunstancias ese mismo hecho caiga bajo la sanción de las penalidades que la ley establece.

Yo, señor presidente, soy partidario de la prohibición absoluta de los juegos de azar, y perdóneme este lirismo el práctico diputado señor Olivera; creo que la ley debe perseguirlos igualmente, ya se efectúen en los garitos ó en los lujosos salones de los clubs, ya se juegue al monte ó al pocker, ya los juegue el pobre ó el rico, porque si á uno hay el peligro de que lo arrastre á la miseria, al otro hay el peligro, y lo vemos muy á menudo, señor presidente, de que lo arrastre á la degradación y al suicidio.

Comprendo perfectamente bien que es imposible evitar el juego, desde que tiene su origen en una de las pasiones más comunes en el hombre; y con razón se ha repetido tantas veces que es una de esas llagas sociales que es imposible curar en absoluto. Pero, precisamente, porque es una llaga social, que no viene forzosamente de la naturaleza humana, como la prostitución, por ejemplo, creo que se puede aplicarle el cauterio y no aplicarle la legalización, como hace este proyecto.

Se dirá, señor presidente, como se ha afirmado, que la lotería nacional, que es nuestra gran inmoralidad, no puede ser suprimida y que no es posible suprimirla porque llena fines de beneficencia, que no están previstos en otra forma en el presupuesto. Se hacen hermosas frases para demostrar que nuestros menesterosos, que nuestros enfermos necesitan asilos y necesitan hospitales; que el erario está pobre y que los ricos no dan.

Pienso, señor presidente, que además de todas las cosas graves que se han dicho y repetido por propios y extraños en nuestro país, siempre será la última de las calumnias, la más grande, afirmar que en esta nación, compuesta de hombres en todo sentido de sentimientos nobles y generosos, el dinero que abunda para tantas cosas, teniendo presupuestos rumbosos como los que tenemos, teniendo las oficinas públicas con el doble de los empleados necesarios, que se extenúan con cuatro horas de trabajo y reparan sus fuerzas con repetidas tazas de té con galletitas, y teniendo el congreso más caro del mundo, que se diga que solamente para la caridad pública no hay de donde sacar el dinero.

Creo que la comisión de legislación,

compuesta de hombres de pensamiento como lo está, ha debido traer á la consideración de esta cámara un proyecto prohibitivo del juego, y nó decir, como ha dicho el señor diputado Argerich:—Creo que la lotería nacional no debe existir; pero no sabemos cómo hacer para suplir el dinero que se necesita para llenar los fines de la lotería nacional.

Sr. Argerich — ¿Me permite una interrupción?

Yo creo eso y no sé cómo suplir ese dinero. Habría sido sumamente útil para el país y para todos que el señor diputado nos hubiese traído la fórmula.

Sr. Pérez (E. S.) — Puede ser que la traiga.

Sr. Argerich — Entonces la discutiremos.

Sr. Pérez (E. S.) — El día que me he sentado por primera vez en esta banca, y voy á contestar al señor diputado,—antes de haber pronunciado en este recinto el señor Varela Ortiz las hermosas palabras que tuvimos ocasión de oír respecto á los ricos y respecto á la lotería,—el primer día que vine á sentarme en esta cámara manifesté á su presidente que el pensamiento que me preocupaba ante todo y que llenaría mis aspiraciones si conseguía realizarlo como representante del pueblo, era poder obtener en este congreso, en una forma cualquiera, la supresión de la más grande de las vergüenzas argentinas: la lotería nacional. Podrá dar fe de esto el señor presidente. (*Muy bien! Aplausos*).

Manifesté que creía que era posible, teniendo verdaderamente puesto el espíritu dentro de estas ideas, llegar á la solución que yo procuraba.

Se dice, señor presidente, que los ricos no dan.

Es cierto, no dan; pero si domina en ellos el egoísmo es necesario que venga la ley á recordarles lo que olvidan sus corazones, estableciendo impuestos progresivos sobre sus capitales. (*Aplausos*). Entonces yo creo que realmente se habrán satisfecho las aspiraciones del país, presentándose un proyecto á esta cámara sobre supresión de la lotería nacional, y substituyéndola para los fines de beneficencia que ella tiene con el impuesto progresivo sobre las herencias.

Debo advertir á la cámara que yo también me encuentro en la clase de los ricos.

Se dice, señor presidente, que hay ciertas cosas que no pueden tocarse;

que no es posible que penetre la policía hasta los clubs; que ellos son instituciones altamente convenientes, necesarias; que ellos son elementos importantísimos de sociabilidad; que ¿cómo podrían sus miembros con la modesta cuota que pagan gozar de todas las comodidades que ofrecen sus recintos? Por esta circunstancia, señor presidente: porque en esos centros sociales se cobran los juegos de naipes no por lo que valen, un peso ó cincuenta centavos, sino diez, quince y veinte pesos por cada uno. Y esto viene á dar una suma que á veces alcanza á diez, doce y quince mil pesos, que, unidos á los ocho ó diez mil que dan las cuotas de los socios, hacen que éstos puedan gozar de todas las comodidades que da la civilización más refinada, aprovechándose de las entradas del juego. Cuánto más conveniente sería, menos comodidades, pero de un origen mejor.

Se agrega, señor presidente, que es necesario estimular la ganadería en todas sus manifestaciones, y que debe existir el sport, porque haciendo correr los caballos de carrera, se mejora su raza. Yo creo que se puede perfectamente probar las condiciones de los caballos de carrera en el circo ó en cualquier otra parte sin que exista necesariamente el sport; y á mí se me ha ocurrido esta sencilla pregunta: ¿á qué aspiramos nosotros?; á tener caballos muy buenos.

Bien, señor presidente; tenemos toros y carneros que pueden competir con los mejores del mundo, y digo yo: ¿ha sido necesario establecer algún sport sobre la finura de la lana, sobre el peso de los toros, sobre la forma de sus flancos para que se haya llegado á este perfeccionamiento en las razas ovina y bovina? (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Pero, señor presidente—y este ha sido el pensamiento que más ha trabajado en mí espíritu:—se suele afirmar muy á menudo que estas son cosas que forzosamente trae la civilización. Y yo me he dicho: no vaya á ser que con mi espíritu intransigente esté con ideas retrógradas, con las cuales vaya á condenar en alguna forma el verdadero progreso, la verdadera grandeza de mi país. Pero no he podido armonizar mis ideas con las ideas generales á ese respecto. He entendido y sigo entendiendo que civilización es la mayor difusión de la enseñanza en todas las clases sociales; que civilización, es el mayor progreso en las artes, el mayor progreso en las

industrias, y sobre todo la mayor cantidad de bien social distribuida entre el mayor número de ciudadanos.

Y después de no haber encontrado que sea en forma alguna condición de la civilización el juego, sino uno de esos vicios que la suelen acompañar, como acompañan á las cosas más hermosas, muchas veces, las mayores podredumbres, me he dicho, señor presidente, si no será cierto que á la civilización se la calumnia en la misma forma que se calumnia á la libertad: bajo el manto de la una pretenden cobijarse todas las licencias, y con el manto de la otra pretenden cubrirse todas las corrupciones.

Encuentro en las palabras del señor miembro informante de la comisión una cosa con la cual creo deben estar conformes con él y conmigo los señores diputados: ¡es imposible continuar así!

Sí, señor presidente, es imposible que sigamos en esta forma, corrompiendo por acción de los poderes públicos á nuestro país, y que venzamos á pretender aplicar á esta llaga mortal, á este cáncer, esta cataplasma de la reglamentación. (*Risas*). Y sobre todo, señor presidente, igualemos á todas las clases sociales. Los ciudadanos argentinos son iguales ante la ley: lo dice la constitución. El día que sancionemos una ley de juego que sea nuestra aspiración, que realmente llene las necesidades públicas, será una ley que pueda aplicarse á todos los ciudadanos argentinos, ya jueguen en los garitos, ya jueguen en los lujosos salones de los clubs.

He dicho. (*¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Voy á contestar muy brevemente las tres opiniones que se acaban de verter. Las palabras del señor diputado Lacasa, son una gentileza, son una adhesión. Las palabras del señor diputado Oliveira, disintiendo en los considerandos, como decimos los hombres del foro, coinciden totalmente con nosotros en la parte dispositiva, como también decimos. Y las palabras del señor diputado por Buenos Aires coinciden totalmente con nuestros propósitos é intenciones. En su hermoso discurso que la cámara acaba de oír con gusto, el señor diputado no ha hecho sino aducir razones que ayudan al despacho de la comisión.

El miembro informante dijo con la parquedad de palabra que comúnmente emplea: no voy á aprovechar la ocasión para hacer una disertación contra el juego, en primer término porque

trató brillantemente la cuestión el autor del proyecto cuando lo presentó, y en segundo lugar porque le bastaba referirse á la cita de un autor clásico conocida, por todos los señores diputados que deben tenerla fresca en su memoria, especialmente el señor diputado por Buenos Aires. Su peroración es un apoyo para el proyecto; las consideraciones que ha aducido, los debates que pueda provocar, pertenecen á la discusión en particular.

El señor diputado por Buenos Aires puede substituir este proyecto por un artículo único que diga: «Queda suprimido el juego en toda la República: las penas serán tales y cuales»

En una palabra: todo cuanto el señor diputado acaba de decir, son otros tantos argumentos en favor del despacho de la comisión. (*Muy bien!*)

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra.

No me siento necesitado, como autor del proyecto, á teorizar, haciendo su defensa, por cuanto por un curioso y original consorcio de ideas, estamos todos conformes; pues tanto la plática alegre del espíritu por hoy triste, del diputado por Buenos Aires señor Olivera, como la oración inspirada en la más absoluta verdad, en la más absoluta moral, del señor diputado Pérez, concurren, en el primero por su declaración final, á sostener el proyecto por mí iniciado y despachado favorablemente por la comisión; y el segundo del distinguidísimo diputado por Buenos Aires doctor Pérez al exponer ante la cámara, nó en una forma concreta, sino en la misma forma ideal que yo emití al fundar este proyecto, un sinnúmero de cosas que todos sabemos.

Que la lotería no debe existir; que no se debe favorecer al hipódromo... ¡Propóngalo el señor diputado en la discusión en particular! Donde quiera que lo proponga, me comprometo á votar en favor: participo de sus opiniones... pero á condición de que no me ha de suprimir la lotería nacional, sin mantener abiertos todos los hospitales y todos los asilos de la República, desde la capital hasta Jujuy. Con esa condición, ningún inconveniente puede tener ningún diputado en votar la supresión de la ley número 3313.

Lo que el señor diputado proclamaba hace un momento, está en la mente de todos los señores diputados. Todos sabemos que no debe existir la lotería nacional. Reemplácela el señor diputado. El señor diputado tiene un proyecto de

impuestos progresivos á las herencias... El problema no es tan sencillo! Es muy fácil enunciarlo; pero ¿sabe el señor diputado los debates á que daría lugar un proyecto de tal magnitud?

—El señor Luro hace una observación en voz baja al orador.

Como no quiero entrar á discutir la idea del señor diputado, no puedo recoger el argumento que me ofrece mi distinguido amigo el doctor Luro: que la constitución establece el impuesto proporcional.

Proponga su idea el señor diputado, y una vez que el parlamento haya resuelto establecer el impuesto progresivo sobre las herencias, y se destinen esos recursos para sostener los asilos y los hospitales, también lo acompañaré con mi voto.

Sr. Pérez (E. S.)—He dicho que estoy de acuerdo con el pensamiento de la comisión, en que la primera cosa que debe establecer el presupuesto son los fondos para satisfacer las necesidades de la beneficencia; y que en último caso, si no hubiera otro medio de suprimir la lotería, propondría eso. No creo que sea la única solución.

Sr. Varela Ortiz—¡Admirable, señor diputado, admirable!

Pero le voy á demostrar que todo eso es inútil. ¡Si eso ha existido! Y á tal punto han escaseado las rentas del tesoro para el sostenimiento de la sociedad de beneficencia pública que ni siquiera la antigua partida, que desde la época de Rivadavia hasta hace muy poco tiempo figuraba en las rentas generales de la nación, para el sostenimiento de la sociedad de beneficencia, figura hoy, creando la situación presente, de angustias, en que el total del producido de la lotería, del 60 % que le corresponde á la capital, va directamente á la sociedad de beneficencia, sin que reciban el óbolo de esta caridad general, que así puedo llamarle á la lotería de beneficencia, á pesar de los aspavientos que pueda hacer el señor diputado, esta caridad general que en Francia se llama de socorro eventual, donde, á pesar de que existe la ley prohibitiva de toda lotería, se juegan un sinnúmero de loterías al año, aunque no tengan carácter permanente, con el solo propósito de beneficencia pública.

Todo esto nos conduce, señor presidente, para volver sobre lo que todos sabemos y hemos repetido hasta el can-

sancio: que la lotería es muy mala, que se debe suprimir. Cualquiera que administre los recursos, yo creo que no encontrará en la cámara un solo voto en contra.

Sr. Lacasa—Existe un proyecto presentado por el señor diputado Cantón.

Sr. Varela Ortiz—Existen un sinnúmero de proyectos. Y sobre todo, ese proyecto está en todos los pensamientos y en todos los corazones.

Algunos argumentos se hacen, entre otros el que la policía no entra en los clubs.

Si; la policía entra en los clubs.

Más es precisamente á los únicos puntos donde entra con autorización legal indiscutible. Existe desde el año 1892 un decreto dado por el presidente Pellegrini. Haré la historia del decreto. Se fundó un club nuevo con el nombre de New Club. Era sencillamente un garito disfrazado. Llega la policía un día; pretende entrar; se le prohíbe la entrada y el presidente de la República dicta en seguida un decreto retirándole la personería jurídica y estableciendo que todo club social que en la capital de la República no diera entrada libre á la policía para que en ellos se hiciera practica la legislación existente sobre el juego, no gozaría de los beneficios de la personería jurídica. De manera que jamás se le ha prohibido la entrada á ningún club. Se dice: en los clubs no se han hecho efectivas, como en los gariitos vulgares, donde el público entra libremente, todas las disposiciones legales que rigen el juego.

Señor presidente: no hay en parte alguna de la tierra... más le diré al señor diputado: en todas las naciones civilizadas en donde la legislación contra el juego de azar es severísima, hay leyes especiales, de excepción, que legislan el juego en los clubs y casinos.

Le agregaré al señor diputado: que en París, en el corazón de París, en el boulevard des Capucines, existe un club que lleva el nombre del boulevard mismo, club donde las barajas con que se juega vienen lacradas de la policía; la policía entrega al club las barajas con que se ha de jugar: le reglamenta el juego. ¿Por qué? Porque estos no son delitos ante ningún criterio, de orden legal ni de orden moral; son simples extravíos de la masa del pueblo, de la sociedad, que hay que curar allí donde la enfermedad puede ser peligrosa, no en los centros superiores de la sociedad. Si todos sabemos que cualquiera de

nosotros que vaya á jugar... quizá el señor diputado haya jugado.

Sr. Pérez (E. S.)—¡Jamás!

Sr. Varela Ortiz—Yo sí (*risas*)... y en mi compañía muchos... muchos de mucha moral. Y muchos grandes hombres de la humanidad también lo han hecho... Acuérdesse de Fox el señor diputado... y de un sinnúmero de hombres públicos argentinos.

Sr. Vivanco (P.)—No era seguramente una de sus virtudes.

Sr. Varela Ortiz—Si no una de sus virtudes, uno de sus placeres.

Sr. Vivanco (P.)—Se embriagaba también algunas veces.

Sr. Varela Ortiz—Ya sé que el señor diputado es partidario de la moral abstracta; profesa la moral absoluta. Yo, nó. (*Risas*).

Todas esas cosas, señor presidente, las sabemos todos; pero es imposible evitarlas.

Me mostraba hace un momento mi distinguido amigo el doctor Leguizamón, diputado por Catamarca, lo bien encontrada que estaba la expresión del comentario al artículo del código español, diciendo: esto no es un delito; esto es un extravío...

Efectivamente, ¿es una plaga el juego? Pero, ¿cuál es el perjuicio que puede producir en los centros sociales superiores? Ninguno. En cambio hay que evitar que el ahorro del pobre vaya á ser robado por un vendedor de billetes de sport ó por un ciclista que corre cuando le conviene y si no le conviene no corre, ó por una tómbola. Esas son las plagas sociales, que la legislación, en todas partes del mundo, persigue y procura evitar.

Considerado á la luz de un criterio constitucional de interpretación literal, naturalmente esto importa un atentado contra una de las más preciosas libertades naturales: el libre albedrío ejercitado en las acciones privadas. Aquello que es tan precioso, que la constitución dice que su juzgamiento queda reservado á Dios y en manera alguna sujeto á la autoridad de los magistrados.

Sr. Ugarriza—El pensamiento, nó las acciones.

Sr. Varela Ortiz—«Las acciones privadas», dice la constitución. ¿Y no es una acción privada el jugar?

Sr. Vivanco (P.)—Según el proyecto cuando se juega en clubs, son acciones privadas; pero nó cuando juega el pueblo en las casas de sport y de quinielas.

Sr. Varela Ortiz—Propóngase los agregados que se quiera, que todos tendrán cabida en el proyecto.

Sr. Vivanco (P.)—En el proyecto despachado se hace esa distinción, por eso es que lo criticamos y la crítica resulta fundamental.

Sr. Ugarriza—Probar en el interior de su casa la resistencia de un cañón Krupp, ¿es una acción privada que puede ser prohibida?

Sr. Varela Ortiz—Yo no sé; ensáyelo.

Los logogrifos jurídicos son de imposible contestación.

¿Cómo se me va á ocurrir de inmediato darle una contestación á mi vecino, que es un distinguido jurista, cuando me pregunta: «Si ensayo un cañón Krupp en mi cuarto, ¿me lo prohibirán?» Ensáyelo, y se sabrá.

Este asunto de las acciones privadas no sujetas sino al juzgamiento de Dios y exentas del fallo de los magistrados, dió lugar á una de las más risibles vistas fiscales—me permito clasificarla así, porque de ese modo la clasifiqué públicamente en aquel entonces—de un señor procurador general de la nación—que no he de nombrar—considerando un proyecto de ley prohibitivo de los juegos de azar, proyecto de ley que elevara al ministerio del interior el jefe de policía de la capital federal. Se opuso por dos consideraciones que son monstruosas. Dijo que no es viable en el mecanismo de la legislación argentina: 1.º, declarar que todo juego de azar debe ser prohibido, porque es atentar contra el principio del libre albedrío de las acciones privadas de los hombres, cuyo juzgamiento está reservado á Dios; y 2.º, porque la disposición en que se establecía el secuestro de los utensilios, muebles, etc. destinados al juego, era contraria al artículo 17 de la constitución, que establece que «la confiscación de bienes queda borrada para siempre del código penal argentino». Este procurador general de la nación se había olvidado por completo que existe un extenso capítulo en el código de procedimientos criminal que se llama «el cuerpo del delito»; y creo que todavía está de procurador general de la nación! (*Risas*).

Me parece que no he de necesitar entrar en mayores digresiones para llegar á la demostración que me proponía: que todos estamos conformes en los anhelos é ideales del señor diputado por Buenos Aires.

He dicho. (*¡Muy bien!*)

Sr. Vivanco (P.)—Pido la palabra.

Voy á ser muy breve, porque me parece que la cuestión en general ha sido debatida brillantemente, tanto por el autor del proyecto en discusión, como por el miembro informante de la comisión y por los que han hecho observaciones en pro y en contra del despacho. Creo que las críticas, aun comprendidas en éstas las ideas de los mismos que se oponen al despacho, están conformes en reconocer que el proyecto es conveniente y que sólo peca por defecto; nadie hasta ahora ha dicho que sus disposiciones no sean benéficas y que no tiendan á evitar graves perjuicios y á moralizar en parte las costumbres generales, sino únicamente que tal cual viene presentado el despacho importa, en realidad, dejar subsistente un monopolio del juego en favor del estado, lo que ya importaría una medida de gran inmoralidad, cuyos efectos no hay para qué mencionar por ser conocidos de antemano.

Sólo se toma en cuenta para mantener la excepción, porque esto es lo más visible, el producido de la lotería nacional, que va cada año disminuyendo de una manera creciente; pero no se toma en cuenta el efecto contrario que está produciendo, y si estos beneficios que se traducen en una suma de dinero que se invierte en los establecimientos de caridad, puede compensarse con los daños que está produciendo precisamente en las clases más menesterosas, que solicitadas por una ambición muy legítima, muy humana, ponen sus pequeños ahorros en un billete de lotería esperanzados con mejorar rápidamente, de una manera fulminante, su situación, pasando de la indigencia á la opulencia. Claro está que si por un lado se pretende sostener establecimientos de caridad y de beneficencia con el producido de la lotería, por otro lado se está fomentando y aumentando el número de los que han de necesitar de esos establecimientos. Esto me parece de toda evidencia.

Quiere decir entonces que por un consenso unánime de la cámara, de lo que se trata en realidad es de buscar la fórmula con que pudiera suprimirse la lotería nacional.

Yo me he resistido en diversas ocasiones á que el presupuesto de la lotería nacional forme parte del presupuesto general de la nación, y aduje las razones en oportunidad, diciendo que me parecía una vergüenza que se hiciese figurar,

con la sanción del congreso, en el presupuesto de la nación, esto que es una prueba de la insuficiencia del poder público para cumplir con la función del estado, de atender á la caridad pública; pero he pensado también que quien pida que se suprima la lotería nacional está obligado á presentar en primer lugar los recursos con los cuales será reemplazado.

Por una coincidencia que yo debo reputar feliz, dada la preparación que ha demostrado el señor diputado por Buenos Aires, doctor Pérez, hace cuatro años (y hago notar la coincidencia, porque no he tenido el honor de ser su amigo ni siquiera estar relacionado con él), hace cuatro años, digo, propuse en la comisión de presupuesto un proyecto de creación de impuestos á las herencias directas y á las donaciones. Se me contestó, entonces, por el ministro de hacienda allí presente y por el presidente de la comisión que más tarde fué ministro de hacienda, que ese era un impuesto socialista; que, por consiguiente, ese solo bautizo lo descalificaba desde ya.

No me asustan los calificativos; lo que me asusta es que las ideas, los propósitos, las acciones, sean malas... Contesté que para mí importaba poco que se le bautizara con el calificativo de socialista, pero que debía recordar al ministro de hacienda y al presidente de la comisión de presupuesto que hace más de cien años existe ese impuesto en Inglaterra y todavía no se conocía la palabra socialista, aunque se conocían desde los orígenes de la historia los males sociales.

Yo tengo casi concluida la redacción de ese proyecto y he tomado como base la legislación inglesa, teniendo también en cuenta las últimas reformas hechas por el parlamento francés. Y he tomado por base esos antecedentes, porque una ley que ha tenido su imperio durante cien años ha podido prever todos los inconvenientes que pueden presentarse en la práctica, y por esto encuentro que la ley inglesa es una obra perfecta en el sentido que puede emplearse la palabra tratándose de un acto legislativo. En ella está todo admirablemente previsto y se provee perfectamente bien á todos los resultados que pueden presentarse. A tal extremo es perfecta y provechosa esa ley, que después del *income tax* viene en segunda línea, como el recurso más importante, el que produce este impuesto.

El año próximo pasado, como presi-

dente de la comisión de presupuestos, y esto lo recordarán todos los colegas...

Sr. Lacasa—Es verdad.

Sr. Vivanco (P.)—... propuse la creación de este impuesto; pero antes necesitaba tener ciertos datos estadísticos, á cuyo fin se dirigió una nota á los señores ministros de hacienda y de justicia, pidiéndoles todos los antecedentes necesarios para saber cómo encontrar el promedio del importe de las herencias directas y de las donaciones en el trascurso de los últimos cinco años.

Esa nota después de diversas demoras fué pasada al ministerio de justicia. Ha transcurrido el tiempo, se han cambiado los ministros, y todavía no tengo la contestación. Ultimamente fui á ver al nuevo ministro doctor Fernández, y le solicité que me hiciera el servicio de despachar el asunto, porque lo necesitaba como un fundamento necesario para reemplazar los recursos que da la lotería.

Quería hacer estas declaraciones, señor presidente, porque creo que hasta me encontraba aludido en diversas formas por los discursos que han pronunciado los oradores que me han precedido en el uso de la palabra.

Desde luego, debo manifestar que no tengo ningún escrúpulo ni creo que voy á limitar la libertad de conciencia de nadie votando este proyecto, por lo que le voy á prestar mi voto. Pero quiero dejar constancia de que lo encuentro defectuoso, porque no comprendo todo lo que debiera comprender, y porque me parece que es un malísimo ejemplo el que daría la cámara dejando como único juego autorizado el juego que redundaba en beneficio del estado.

Se prohíbe lo que se encuentra mal en los particulares y se deja el juego del estado, simplemente porque los que debían hacerlo no se han preocupado de encontrar los medios de reemplazar los beneficios que da la lotería y conservar la beneficencia como función permanente y orgánica del estado moderno.

Nada más, señor presidente.

Sr. Varela Ortiz—Diríase, señor presidente, que este proyecto es defectuoso porque no legisla sobre las herencias; porque el señor diputado no ha hablado absolutamente de otra cosa.

Para decir que el proyecto es defectuoso, es menester señalar dónde están los defectos, porque yo podría decir que es perfecto; y entre dos afirmaciones encontradas, sin demostración, la cámara no sabría por cuál decidirse.

Sr. Vivanco (P.)—Yo creo que he sido suficientemente expreso y categórico en mis observaciones. He manifestado que le voy á dar mi voto y que le encuentro el defecto de no comprender todo lo que debiera.

Sr. Varela Ortiz—Entonces no es defectuoso, sino incompleto, solamente. Son términos diversos.

Sr. Vivanco (P.)—El defecto consiste precisamente en no abarcar todo lo que debiera. Es sencillamente una fórmula de lógica elemental decir que las cosas pecan por exceso ó por defecto; y este proyecto peca por defecto. Todo lo que contiene es muy bueno, pero le falta algo que es mejor. Me parece que no se puede ser más categórico.

Por eso he manifestado que le daré mi voto, sin perjuicio de buscar los recursos necesarios para reemplazar los que actualmente se piden á la lotería, y por eso hablé del impuesto á las herencias, para contestar anticipadamente á la observación de que es menester reemplazar por otro el recurso que se quiere suprimir puesto que no se suprime la necesidad.

Sr. Varela Ortiz—¡Muy bueno!

Sr. Vivanco (P.)—¡Muy bueno! ¡Si! El mismo señor diputado se ha anticipado á decir que es muy bueno y que él prestaría su apoyo el día que se presentara un proyecto para substituir por otros los recursos de la lotería.

Sr. Varela Ortiz—Pero, señor presidente, estas son declaraciones de idealismo en que estamos enredándonos, como si alguien estuviera en contra de todo esto! ¡Todo el mundo á favor! ¡Profesiones de fe!

Sr. Helguera—Pido la palabra.

Quiero dar en dos palabras las razones que he tenido para firmar el despacho de la comisión.

No he consultado los libros de los moralistas ni me he inspirado en las profundas discusiones de los filósofos que tratan esta cuestión del juego desde un punto de vista que para mí no es el que corresponde en este caso. He considerado este asunto desde el único punto en que ha sido tratado por los hombres de gobierno en todos los países y he seguido la historia de las disposiciones que penan el juego en las legislaciones de los pueblos más adelantados, y he tomado también en cuenta todas las leyes que se han dictado en nuestro país.

El juego ha sido prohibido en todas las épocas con penas fuertísimas, que han llegado hasta la confiscación y

el destierro y hasta la prohibición del derecho de testar; y sin embargo, el juego ha existido y persistido. ¿Por qué? Porque hay algo en el fondo de la naturaleza humana que lleva al hombre á buscar estos esparcimientos agradables, esta tendencia á buscar una emoción que cuando da resultados halagüeños es buena y en caso contrario es desagradable. En todos los países y en todas las épocas se ha jugado y las legislaciones más fuertes, mas rigurosas, más draconianas, no han conseguido extirparlo.

¿Qué nos corresponde hacer entonces? Estudiar los antecedentes legislativos de esta llaga social y adoptar las medidas que hayan dado mejor resultado.

Por mi parte, he estudiado la legislación francesa, de donde el autor del proyecto ha tomado la mayor parte de sus disposiciones, á través de la historia de seis ó siete siglos que tiene esa legislación, y encuentro que se ha llegado allí á lo que ahora se propone aquí como lo único práctico y eficaz para suprimir el juego, nó en las manifestaciones inocentes que tiene, puede decirse, en las cuales con mucha razón se ha dicho que más que pasión, que más que delincuencia hay un acto de extravío, sino de suprimir el juego en la forma perjudicial y funesta como fomentadora de la ruina de las familias y como precursora del crimen y de los hechos de sangre.

Un gran pensador, el señor González, comentando la obra del eminente criminalista doctor Pacheco, ha expresado el proceso de la legislación del juego: ha indicado hasta dónde puede llegar, con estas palabras que voy á permitirle leer como conclusión de las que acabo de decir.

«El legislador, dice, que haya disminuido el juego, la embriaguez y regularizado las casas de prostitución, merecerá más laureles que todos los oradores, militares y escritores de utopías irrealizables, porque son ellos tres enfermedades sociales de difícil solución, dignas del estudio del filósofo.»

Yo no creo que se llegue por ninguna ley ni por ninguna forma á suprimir el juego en absoluto; pero creo que la legislación propuesta es la que nos corresponde dar como hombres de gobierno en el estado actual del país.

He dicho.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Simplemente para un recuerdo histórico, en pocas palabras. El 30 de ju-

Año 9 de 1902

de 1889 se promulgaba el nuevo código penal italiano, llamado de Zanardelli. En el momento de la discusión en el senado, el relator decía con referencia á la lotería: «Nos es grato esperar que ese juego sea abolido apenas las condiciones financieras del reino permitan convertir en realidad esta deseada reforma.»

Se sancionaron los artículos 484 á 487, *De los juegos de azar*, y todavía no ha sido suprimida la lotería. Hace trece años!

Sr. Presidente—Si no se hace uso de la palabra, se votará en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, se aprueba sin observación el artículo 1.º

—En discusión el 2.º

Sr. Helguera—Pido la palabra.

Pido que se vote por partes, porque voy á pedir una modificación en el inciso c.

—Se aprueban los incisos a y b.

Sr. Helguera—En el inciso c se castiga con la pena de mil pesos de multa ó seis meses de arresto á las personas que participen del juego; es decir, se les asimila con los que tienen casas de juego, con los administradores, banqueros, etc.

Esto no es justo, no existe en el artículo 410 de la ley francesa, de donde está tomado.

Después de lo que se ha dicho sobre esta materia, creo fundada la proposición que voy á hacer, para que á estas personas se las castigue con cien pesos de multa ó un mes de arresto, y en caso de reincidencia, con una y otra conjuntamente, en lugar de mil pesos de multa ó seis meses de arresto.

Como antecedente de esto, puedo citar á la cámara el código español, que establece, como se sabe, el arresto mayor y el arresto menor, y pena á las personas que participasen del juego con el minimum del arresto mayor, y en caso de reincidencia, con la media, que creo alcanza á cuatro meses.

En esta forma, el artículo penaría á los que se extraviaban en el juego, como se ha dicho, y no los equipararía con los dueños de casas de juego.

Sr. Varela Ortiz—Yo dejo entregado al voto de la cámara la apreciación de la pena. No modifica fundamentalmente mi propósito, no altera la ley á otra pena, siempre que la que se

proponga no sea ilusoria. De manera que la escala de penas con que ha de ser castigado este *soi disant* delito, lo dejo completa y absolutamente entregado al juicio y á la decisión de la honorable cámara.

Sr. Argerich—Por mi parte, adhiero á la indicación del señor diputado por Tucumán, y pediría que se numerase ese artículo como tercero, quedando el siguiente como cuarto.

Sr. Presidente—¿Entonces la mayoría de la comisión está por la modificación?

Sr. Argerich—Sí, señor; la acepta.

Sr. Presidente—Sirvase el señor diputado dictar su proposición.

Sr. Helguera—«Pagarán una multa de cien pesos...

Varios señores diputados—Doscientos pesos.

Sr. Helguera—Perfectamente... ó en su defecto dos meses de arresto...

Sr. Argerich—Tres meses, se podría poner.

Sr. Helguera—«Pagarán una multa de doscientos pesos ó en su defecto dos meses de arresto, y en caso de reincidencia una y otra conjuntamente, las personas que participen del juego ó que la autoridad policial sorprendiera en el interior de una casa de las comprendidas en el artículo precedente.»

Sr. Gouchon—Pido la palabra.

Me parece que con la primera parte del artículo propuesto por el señor diputado Helguera quedan comprendidas todas las personas que son pasibles de pena en materia de juegos de azar. Las personas que participaren del juego, pase; pero la segunda parte se refiere á las personas que se encontraran en el interior de una casa de juego.

Estas casas generalmente, y una vez dictada la ley con más razón, no tienen ningún distintivo exterior que pueda indicar á las personas que son casas de juego; y por el solo hecho de encontrarse en ellas, aun sin participar del juego, serían pasibles de pena, según el artículo.

Indudablemente, esto no es justo y yo propundría que se votara solamente la primera parte.

Sr. Dantas—El artículo se refiere á los que están empleados en las casas de juego.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra.

El proyecto impone penas, señor presidente, á todos los que se encuentren en el interior de una de las casas de juego, á que se refiere el inciso a, á

aquellas en que se admita al público, sea libremente, sea por presentación de los interesados, afiliados á socios; incluye también á los administradores, banqueros y todos los demás empleados de la casa, cualquiera que sea la categoría del empleado...

Sr. Dantas—¡Claro!

Sr. Varela Ortiz—... por una razón sencilla: porque tan responsable de la existencia del garito es el banquero que da los capitales para que se juegue, el *croupier* que paga ó cobra lo que se juega, como el portero que está en la puerta del establecimiento estorbando la entrada á los agentes de la autoridad y sirviendo de cómplice, quizá el mayor cómplice, en la comisión de este *soi-disant* delito.

Me parece que es exagerar un poco la inocencia de las personas que se encuentran en el interior de una casa de juego, suponer que puedan hallarse allí sin saber dónde están.

Ocurrió una vez, y esto suele ser muy común, que se estableció un club llamado «Club Canario». Resultaba que había en este país una gran inmigración de habitantes de las Islas Canarias, que habían dado su nombre á este club.

Un día, un comisario de policía lo denunció como casa de juego. La policía, que no dispone de muchos medios para cerciorarse de estas denuncias, colocó un agente de policía en la puerta de la casa llamada de los canarios. A poco andar, un caballero de esta sociedad (que ha muerto ya), se presentó al jefe de policía pidiéndole el retiro de aquel agente.

—No puedo, le contestó el jefe de policía, porque necesito conocer qué personas entran allí y saber si entre ellas están los profesionales del juego.

—Señor, le contestó aquel caballero; yo le puedo dar tarjetas de entrada y la policía en cualquier momento podrá entrar, recorrer la casa de un extremo á otro, y cerciorarse de que allí no se juega; allí sólo se toma café, refrescos y se juegan algunos partidos de dominó.

El jefe de policía aceptó el ofrecimiento. Durante ocho días todos los informes de los empleados de policía eran idénticos: allí no se jugaba. Pero al noveno día, un empleado dice al jefe de policía:

—Señor; se ha observado que entran á esta casa cuarenta personas; á las doce de la noche se cierra la puerta y sólo han salido diez personas; las otras treinta no se sabe lo que hacen; y como la

puerta de calle se cierra á las doce, las tarjetas de que dispone la policía no sirven para la entrada, son inútiles. Sería menester golpear la puerta, y al primer llamado á todos esos caballeros se les encontrarán tomando café.

Valiéndose de uno de los afiliados que allí jugaban, porque era un garito, la policía entró y encontró á todos los iniciados que se reunían á tomar café, jugando alrededor de una mesa de ruleta y otra de bacará.

Esta es, casi siempre, la historia de los inocentes que se encuentran en las casas de juego.

He dicho. (*Muy bien!*)

Sr. Presidente—Se votará el artículo 3.º

Sr. Argañaraz—Pido la palabra.

Para que se vote el inciso tal cual está, por ser el proyecto de la cámara, aun cuando particularmente los miembros de la comisión hayan adherido á las modificaciones propuestas por el señor diputado Helguera. Soy radical en mis ideas sobre este asunto y estoy, por tanto, con el despacho de la comisión.

Sr. Presidente—Se votará primero el inciso *c* del despacho de la comisión, y si no fuere aceptado se votará en la forma propuesta por el señor diputado por Tucumán.

Sr. González Bonorino—La comisión ha consentido en retirar la redacción del inciso, tal como lo ha despatchado.

—Se vota el inciso en discusión y es aprobado por 35 votos.

Sr. Presidente—Está en discusión el artículo 3.º

Sr. Varela Ortiz—Todo artículo que no se observe, podría darse por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente—Habiendo asentimiento por parte de la cámara, así se hará.

—Se da por aprobado el artículo 3.º

—En discusión el 4.º

Sr. Drago—Pido la palabra.

Sobre el artículo 3.º

Observo que no se provee pena alguna para la reincidencia en los casos establecidos en el artículo 3.º

Sr. Varela Ortiz—Tiene razón el señor diputado; es una omisión; habría

que agregar como en el artículo anterior: en caso de reincidencia una y otra conjuntamente.

Sr. Argerich—O yo he entendido mal ó no se ha votado el inciso c.

Sr. Presidente—Está en discusión el artículo 3.º. Sírvase dictar el agregado que propone el señor diputado.

Sr. Drago—«Pagarán una multa de dos mil pesos ó en su defecto arresto por un año y en caso de reincidencia una y otra pena conjuntamente.»

Sr. Barroetaveña—Pido la palabra.

Ya que se observa este artículo me permito llamar la atención de la cámara sobre los primeros delincuentes que aparecen en el inciso b, en que se aplican las penas que establece á los dueños de las propiedades donde se establezcan casas de juego. Me parece que los propietarios pueden ser completamente inocentes del destino que se dé á su propiedad, sobre todo si no se guardan las precauciones del caso.

Sr. Varela Ortiz—No ha sido mi mente ni de la comisión penar á los propietarios de las fincas.

Sr. Barroetaveña—Entonces habría que cambiar la redacción y poner á los dueños de los locales.

Sr. Varela Ortiz—A mí me parece que la redacción está clara: los dueños, gerentes ó encargados de los locales. Me parece que no podría haber juez que entendiera que se refiere este artículo al propietario de la finca.

Sr. Sánchez de Bustamante—Los dueños, gerentes ó encargados de los locales, ó unos y otros.

Sr. Orma—Pero con esta explicación me parece que no puede quedar duda.

Sr. Varela Ortiz—Con esta explicación bastaría.

Sr. Presidente—¿El doctor Barroetaveña está conforme con la explicación dada?

Sr. Barroetaveña—Sí, señor; aunque conviene que quede clara la ley.

Sr. Lacasa—Yo entiendo que está bien como dice, porque los propietarios pueden excluir esto del contrato de locación, pues precisamente los propietarios que alquilan casas para cosas prohibidas cobran alquileres mucho más altos.

Sr. Drago—Pido la palabra.

Propondría que en vez de *locales*, se dijera *las casas ó establecimientos donde se vende*, etc.

—Apoyado.

Sr. Varela Ortiz—*Local* tiene la

ventaja de que es comprensivo de *casas y establecimientos*. Enumerar *casas ó establecimientos*, puede dejar fuera de la ley un sinnúmero de *locales*; mientras que con sólo poner *locales* van á quedar comprendidas las *casas y establecimientos* á que el señor diputado quiere referirse. De manera que la ley sale con más ventajas en la forma en que está proyectada.

Sr. Presidente—Habiendo asentimiento de la honorable cámara respecto del agregado propuesto por el señor diputado Drago, queda aprobado el resto del artículo.

—En discusión el artículo 4.º

Sr. Vivanco (P.)—Pido la palabra.

Es para hacer una pregunta á la comisión.

Entiendo que la ley de creación de la lotería nacional ha previsto este caso y lo ha penado también.

No tengo á la vista la ley, pero quisiera que se me dijera en qué consisten las modificaciones hechas por este proyecto á la ley actual.

Sr. Varela Ortiz—Aquí tengo la ley á la mano.

La ley de la lotería, número 3313, sólo pena la introducción y la venta de estas loterías que la misma ley no autoriza.

El ideal de los loteros clandestinos en la capital de la República sería la conservación del artículo de la ley en la forma que hoy existe.

La razón es muy sencilla. Están amparados por una jurisprudencia judicial, que será buena ó será mala, pero que ha destruido en absoluto todos los efectos que la ley se proponía. La ley dice: «queda prohibida la introducción y venta de toda otra lotería». Y á pesar de esa disposición se ha llegado á esto: sorprendidas las agencias ofreciendo á la venta billetes de lotería, sus agentes han sido procesados y el juez ha declarado que no eran pasibles de pena, por cuanto la venta no se había realizado! Y así es que con tan original jurisprudencia, la policía de la capital, en cuatro años, según la estadística que tengo á la vista, ha entregado á la autoridad judicial 572 infractores al artículo 9.º de la ley en vigencia; de estos 572 sólo han sido condenados 52; y en estos 52 hay 39 que son mujeres, ancianos y niños de los que ofrecen al viandante un quinto de lotería en venta. ¡Sólo ellos habían conseguido realizar la venta pe-

nada por la ley! El resto ha eludido la acción penal por esa jurisprudencia que ha destruido la ley y los propósitos del legislador al dictarla.

Esta mañana estubo en mi casa el presidente de una lotería autorizada por ley provincial y de venta prohibida en la capital, y me rogó que si alguien en la cámara proponía que no se hiciera extensiva á la circulación, á la impresión, publicación, etc. la penalidad de la ley, que no pusiera mucho calor en sostenerla, porque de todas maneras la ley vigente ya había prohibido la circulación y venta; que ellos tenían loterías autorizadas por legislaturas de provincias y que no podían caer como el común de los defraudadores con billetes clandestinos bajo la acción de esta ley.

Naturalmente, no pude acceder al pedido interesado de este señor, y me encuentro en la situación de rogar á la honorable cámara que apruebe tal cual lo he proyectado este artículo, porque á mi modo de ver no deja escapatoria posible al profesional de esas contravenciones.

Hay mil agencias en la capital de la República, y puede afirmarse que noventa y cinco por lo menos cometen infracciones á las disposiciones de la ley vigente, por medio de loterías clandestinas, loterías que tienen la autorización de legislaturas de provincias, y loterías que son simples papeles que caerían bajo la legislación común de las estafas.

Sr. Vivanco (P.)—Pido la palabra.

Precisamente porque estaba en conocimiento de los antecedentes que acaba de dar el señor diputado, preguntaba cuáles eran las diferencias que existen entre el artículo este 4.º y el 9.º de la ley vigente, para ver si quedaban comprendidos todos los casos posibles de contravención.

Sr. Varela Ortiz—Están previstos todos, señor presidente. El artículo 9.º de la ley vigente dice: «Queda prohibida la introducción y venta de toda otra lotería en la capital y territorios nacionales», que lo puede comparar el señor diputado con el que está en discusión.

Sr. Vivanco (P.)—Es decir, que se refiere á todos los casos y se aumenta la pena...

Sr. Helguera—Aumenta tanto la pena pecuniaria como la pena corporal.

Sr. Varela Ortiz—Si el propósito del señor diputado es que no pueda escapar ninguno de los profesionales,

puede estar seguro que el proyecto prevé todos los casos de infracción.

Sr. Vivanco (P.)—Sí, señor; eso es lo que deseo.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

El artículo 4.º que establece la penalidad, es una consecuencia clara de la sanción del artículo 1.º, donde ha quedado prohibido todo contrato, introducción, circulación y anuncio de cualquier lotería no autorizada; y, entonces, aclarando aún más el precepto de ese artículo, viene el artículo 4.º

Sr. Presidente—¿El señor diputado por Córdoba no propone ninguna modificación?

Sr. Vivanco (P.)—No, señor. Creo que este artículo 4.º prevé todos los casos posibles de violación de la ley.

Sr. Orma—El artículo 4.º empieza diciendo: «incurrirán en las mismas penas»...

Como hay dos artículos anteriores que hablan de penas y éstas son distintas entre sí...

Sr. Varela Ortiz—Podría decirse: «en el artículo anterior».

Sr. Argerich—La comisión acepta.

Sr. Robert—Pido la palabra.

Para pedir informes de la comisión y del señor autor del proyecto sobre si en la disposición prohibitiva de este artículo, caen también todos los juegos semejantes á la lotería, que, sin tener ese nombre constituyen un verdadero juego.

Por ejemplo: hace pocos días, fijándome en una vidriera de venta de billetes de lotería, ví unos papeles que decían: «Cupones de amortización de la compañía general de ahorros», autorizada á jugar por decreto del poder ejecutivo, de fecha 27 de octubre de 1901.

Es una verdadera lotería. El billete, creo, cuesta cinco pesos; el quinto, un peso. El comprador lleva la seguridad de que se le reconocerá después á su billete un valor de sesenta centavos, pero lleva también la seguridad de perder cuarenta.

Figuran premios de dos mil pesos, que nunca suelen salir, porque se hace el extracto sin fiscalización de ninguna especie; y esto sí que constituye una verdadera espoliación sobre el ahorro del pobre.

Sí del informe de la comisión y del autor del proyecto no resultara que están comprendidas estas otras *soi disant* ó verdaderas loterías, yo quisiera agregar una pequeña frase á este inciso, para que quedaran comprendidas.

Sr. Vivanco (P.)—El artículo 5.º las comprende.

Sr. Varela Ortiz—Quizás escape á este artículo 4.º el juego á que el señor diputado se refiere y que no conozco; pero si es juego de azar está comprendido en el mecanismo de la ley.

Sr. Robert—Creo que no es juego, sino una verdadera estafa.

Sr. Argerich—¿Cuál es el agregado del señor diputado?

Sr. Robert—Las palabras: *ó cualquier otro juego semejante*, después de: «por la ley nacional».

Sr. Argerich—La comisión acepta.

—Se aprueba el artículo con las agregaciones propuestas por los señores Orma y Robert.

—Se dan por aprobados los artículos 5.º y 6.º

—En discusión el artículo 7.º

Sr. Campos—Pido la palabra.

Para pedir á la comisión quiera introducir una simple modificación en este artículo 7.º de su proyecto, donde dice: «Ningún campo de carreras podrá», etc. Esto que es perfectamente aceptable refiriéndose á la capital de la República, no lo es respecto de los territorios nacionales. Sancionarlo en la forma propuesta importaría la prohibición de las carreras en los territorios nacionales, donde es no sólo un juego, sino también un ejercicio que está en relación con la clase de trabajo á que se dedican los habitantes de su campaña, y también sirve de estímulo para el mejoramiento de la raza caballar, pues allí no es posible que existan sociedades organizadas para ese objeto y con estatutos previamente aprobados, condiciones todas que exige el artículo para que pueda funcionar un campo de carreras.

Propondría, pues, que en lugar de «campo de carreras» se pusiera «hipódromo» ó «circo».

Sr. Varela Ortiz—He empleado el término de campo de carreras, porque es el empleado por la legislación análoga. Consulté esto con mi distinguido amigo el señor diputado por Buenos Aires señor Olivera, si debía llamarse hipódromo ó campo de carreras, y él con la bondad que lo caracteriza y la amistad que me dispensa y siempre le he correspondido, me dió su opinión favorable á este término.

Sr. Campos—Es que «campo» en castellano tiene una acepción muy distinta de hipódromo.

Sr. Varela Ortiz—El pensamiento del señor diputado nos lleva á estos ex-

temos: basta poner dos palabras por las cuales se exceptúe á los territorios nacionales. El artículo diría así: «Ningún campo de carreras podrá ser abierto al público en la capital de la República sin la autorización», etc.

Sr. Campos—Perfectamente.

Sr. Presidente—¿Acepta la comisión?

Sr. Argerich—Sí, señor.

Sr. Vivanco (P.)—De manera que fuera de la capital podrán establecerse campos de carreras que tengan otro fin que el de la mejora de la raza caballar; porque la observación tiene un triple alcance, desde que abarca dos puntos: el que ha observado el señor diputado por Buenos Aires, para salvar la situación de esta clase de espectáculos en las campañas y territorios nacionales, y esta otra cláusula que establece que estos campos de carreras deben tener por fin exclusivo la mejora de la raza caballar y ser organizados por sociedades cuyos estatutos sociales hubieran sido previamente aprobados.

Sr. Lacasa—Ese no es más que el pretexto.

Sr. Vivanco (P.)—La modificación tiene que abarcar los tres puntos: 1.º, que sean campos de carreras como los que pueden establecerse en la capital, cosa que no es posible en los territorios nacionales; 2.º, que tengan por fin exclusivo el mejoramiento de la raza caballar.

Sr. Campos—Sí pueden también tener ese fin.

Sr. Vivanco (P.)—No tienen ese fin exclusivo. Yo sé que aquí tampoco lo tienen. La tercera condición es que sean organizadas por sociedades cuyos estatutos hubiesen sido previamente aprobados. Estas tres condiciones son impracticables en los territorios nacionales.

Sr. González Bonorino—Por eso mismo se limita á la capital federal.

Sr. Vivanco (P.)—Permitame. Si me están interrumpiendo, no podré concluir.

Por lo mismo que se dice capital federal, hay que decir cómo quedan esos campos de carreras en los territorios nacionales; porque si se establece que los de la capital federal deberán llenar esos requisitos y si no se dice nada respecto de los territorios nacionales, se podría argumentar en sentido contrario, que pueden establecerse esos campos de carreras con cualquier fin.

Sr. Varela Ortiz—Pero no habiendo otra prohibición legal, desde el mó-

mento que se limita el artículo á la capital de la República, queda sobreentendido que no se pone limitación para los campos de carreras de los territorios nacionales.

Sr. Vivanco (P.)—Se prohíbe en la capital federal todo circo ó hipódromo que no tenga por fin la mejora de la raza caballar y que no sea organizado por sociedades cuyos estatutos sociales hubieren sido previamente aprobados; pero, si se autoriza, en los territorios nacionales, todas las carreras con cualquier fin.

Eso es lo que quiere la comisión...

Sr. Varela Ortiz — Porque están sujetas á las reglamentaciones de los gobernadores de los territorios federales.

Sr. Vivanco (P.)—Este proyecto no legisla para los reglamentos de los gobernadores de los territorios; esto se refiere para aquí y para los territorios nacionales; y si lo que se quiere es propender á la mejora de la raza caballar y no fomentar el juego, que se diga claramente; pero que no se diga que se permite jugar aquí en la capital con el fin de mejorar la raza caballar y en los territorios nacionales, nó; y si se quiere jugar y mejorar la raza caballar se podría decir francamente: en una parte se quiere mejorar la raza caballar; en otra, se quiere jugar, aunque en realidad se trate allí y aquí de la misma cosa.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra.

Los escrúpulos del señor diputado....

Sr. Vivanco (P.)—No tengo ninguno; quiero que se aclare no más.

Sr. Varela Ortiz — La falta de escrúpulos del señor diputado...

Sr. Vivanco (P.)—Sí, señor; la falta de escrúpulos; pero que se aclare.

Sr. Varela Ortiz — Los deseos de luz del señor diputado quedarán satisfechos si al terminar el artículo 7.º se pusiera esta sencilla cláusula: el presente artículo solamente regirá en la capital de la República.

Un señor diputado — Está puesto al principio.

Sr. Varela Ortiz—El señor diputado no lo encuentra conveniente al principio; yo lo propongo al final.

Sr. Vivanco (P.)—Sí lo encuentro conveniente; pero siento mucho que no se haya dado cuenta de mi observación.

Sr. Varela Ortiz—Tan me he dado cuenta que... ya verá el señor diputado!

Yo creo que estableciendo que este artículo regirá para la capital de la República, en los territorios nacionales se

podrá hacer carreras de caballos sin el fin de mejorar la raza caballar; es decir, se podrá permitir que se hagan correr caballos en canchas de tres ó cuatro cuadras que es la única diversión de los paisanos...

Sr. Campos—Y está reglamentado por cada municipalidad.

Sr. Varela Ortiz — Pero eso no vale la pena. Esos son permisos que da el comisario de cada pueblo.

El señor diputado no puede exigirnos que tengamos una legislación análoga para los territorios nacionales que para la capital de la República.

Sr. Argerich — Más: en el código rural sancionado el 14 de agosto del 94 hay disposiciones sobre la materia.

Sr. Varela Ortiz—Le agradezco el dato al señor diputado.

Y en último caso, para que se vea el buen propósito de la comisión y del autor del proyecto, le ruego al señor diputado que entregue la fórmula de la modificación.

Sr. Vivanco (P.)—No tengo ninguna que proponer, absolutamente ninguna.

Sr. Lacasa—Pido la palabra.

Sr. Vivanco (P.)—Desearía que el señor diputado tuviera la deferencia de permitirme aclarar la situación en que me han colocado el señor diputado autor del proyecto y el señor miembro informante. En mi concepto me han colocado en una situación completamente injustificada.

No tengo ningún escrúpulo, ni me asusta esto. Bien claramente se ve el concepto que tiene la cámara al sancionar esta disposición. Pero dadas las observaciones del señor diputado referentes á las palabras «campo de carreras», hay que aclarar todo el concepto del artículo, y que se entienda que fuera de la capital de la República se pueden hacer estas carreras con otros fines que no sean mejorar la raza caballar y aunque se trate de agrupaciones de individuos que no sean sociedades con estatutos aprobados.

Esta es toda mi observación, que abarca el pensamiento que comprende este artículo, y á fin de que quede constancia en este debate que se quiere que en los territorios nacionales haya libertad completa para que los paisanos tengan estas diversiones, es decir, que esta ley para combatir el juego permite jugar libremente con tal que sea en los territorios nacionales y eso que ha dicho en su artículo 1.º que se refiere á la nación y territorios nacionales. Me

parece que no puede ser más flagrante la contradicción!...

Por lo demás, no tengo escrúpulos exagerados, porque soy tal como los señores diputados, ni más ni menos. Tengo los escrúpulos que puede tener cualquier hombre moderno digno y caballero que esté en contacto diario con la gente, nó los escrúpulos de un asustadizo y de un hombre lleno de preocupaciones.

He dicho.

Sr. Lacasa — Voy á proponer un agregado al artículo 7.º Las carreras sólo podrán tener lugar en los días festivos.

Esta proposición tiene por objeto evitar que en los días de trabajo tengan lugar las carreras y aparten del trabajo á muchísima gente, haciendo que los empleados públicos abandonen su puesto, como es público y notorio que ocurre actualmente.

Sr. Argerich — Personalmente no acepto esa indicación, porque creo que lo que hace más daño es el de habilitación de esos locales los días en que todo el mundo está de paseo. Es cuestión comprobada.

Sr. Lacasa — Es que precisamente se trata de moralizar y nó de fomentar; y el señor miembro de la comisión, al no aceptar por esa razón, me parece que no está concorde con el espíritu que reina en la ley. Creo que debe ponerse solamente los días festivos. Basta ir un día de trabajo para darse cuenta de la cantidad de gente que concurre.

Sr. Vivanco (P.) — Los que no trabajan.

Sr. Argerich — Por mi parte, disiento, pero no puedo admitir...

Sr. Varela Ortiz — Yo tampoco, porque creo que eso es reglamentario.

Sr. Lacasa — Es lo mismo que se está reglamentando, señor presidente. Desde que el congreso se ha puesto á reglamentar detalles de esta ley, debe entrar á esto que es un principio de moral.

Sr. Gouchon — Pido la palabra.

Voy á proponer un agregado: «Esta disposición no regirá para los territorios nacionales.»

Sr. González Bonorino — Debe votarse como se había propuesto anteriormente: capital de la República; nada más; fué la indicación primera.

Sr. Presidente — Se votará el artículo de la comisión, con la modificación propuesta por el señor diputado general Campos.

Sr. Gouchon — Entonces, retiro mi indicación.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Lacasa — Pido la palabra.

Pido que se vote el agregado propuesto, aunque no tenga el asentimiento de la comisión, porque necesito que quede constancia.

Sr. Presidente — Como no ha sido aceptado por la comisión, se ha votado el artículo tal como ella lo ha propuesto.

Sr. Lacasa — Es un agregado, sencillamente.

Sr. Argerich — Propiamente hablando, este artículo está en trámite parlamentario de comisión, desde que forma parte del proyecto del señor diputado.

Sr. Lacasa — El señor diputado no puede argumentar con eso, desde que ha dejado sin efecto el proyecto. Demasiado se ha hecho en cambiar uno por otro. El señor diputado Varela Ortiz ha defendido lo que ambos legislan con mucha lucidez y esto, lejos de perjudicarlos, los ha beneficiado.

—En discusión el artículo 8.º

Sr. Argañaraz — Pido la palabra.

Como este es un proyecto de ley moralizador, he de votar en contra del artículo por las razones aducidas por el señor diputado por Buenos Aires doctor Pérez y pido que se vote.

—Se aprueba el artículo 8.º

—En discusión el 9.º

Sr. Lacasa — Pido la palabra.

Voy á pedir una modificación á este artículo. Me refiero al que autoriza al jefe de policía para librar órdenes de allanamiento. Nuestra constitución establece una garantía respecto del domicilio, que es un trasunto de todas las legislaciones constitucionales de los pueblos libres y civilizados del mundo.

No quiero entrar en consideraciones respecto de la inviolabilidad de este derecho, porque ellas son perfectamente conocidas de todos los señores diputadas y la hora es avanzada. Pero sí me limitaré á decir esto: el allanamiento está autorizado por los constitucionalistas únicamente en los casos en que la orden respectiva sea expedida por los jueces, y sólo por excepción se faculta á las autoridades municipales á darlas por razones de higiene.

Entonces, debemos considerar que al

sentantes de la autoridad que pueden proceder con absoluta independencia y los únicos que pueden apreciar con razón en qué casos procede esta excepción de la garantía de la inviolabilidad del domicilio.

Estrada cita las legislaciones inglesa y legislación alemana, que siempre atribuyen á los jueces esta facultad. ¿Por qué? Por las razones que he dado: porque ella no puede ser atribuída á la policía, porque no hay que perder de vista que, si bien ahora estamos legislando en tiempos normales y no puede haber el menor temor de que se abuse de esta ley, no sabemos lo que pasará mañana y si esta facultad concedida á la policía no se convertirá en instrumento de opresión.

Sr. Vivanco (P.)—Pero arriba de los jefes de policía están los jueces.

Sr. Lacasa—Es necesario prevenir y no castigar.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra.

Muy breve seré, señor presidente.

Este artículo es el alma de la ley. Sin duda alguna los señores diputados se habrán apercibido de ello. La persecución al juego sería absolutamente imposible si no se armara á la policía con estos medios para sorprender, perseguir y castigar á las casas de juego.

¿Cuál es el peligro que el señor diputado encuentra en ello? Que no es posible entregar á una autoridad legal...

Sr. Lacasa—Autoridad policial, no es legal todavía.

Sr. Varela Ortiz—Será legal desde el momento que la ley la considere tal.

Más; he tomado los propios términos del código de procedimientos: el jefe de policía es juez de contravenciones y allana domicilios con órdenes de allanamiento dictadas por el mismo, cuando se trata de contravenciones. De manera que si el peligro no existe hoy no veo por qué ha de producirse mañana.

¿Por qué si puede dar órdenes de allanamiento cuando se trata de infracciones que merezcan la pena de cien pesos de multa ó un mes de arresto, no ha de poder darlas para allanar casas de juego? ¿Por qué el señor diputado ve visiones y peligros donde no los hay?

Sr. Lacasa—No veo visiones.

El deber de legislador me hace tomar las cosas como son, y cuando me encuentro al lado de Estrada y otros tratadistas que han ilustrado la materia, no me importa tener mayoría ó minoría en contra de mi opinión; voto con mi conciencia de diputado.

—Varios señores diputados piden la palabra.

Sr. Varela Ortiz—No he terminado, señor presidente, y al señor diputado debo manifestar que puede interrumpirme siempre que lo desee, rogándole únicamente que no sea tan largo como esta vez. Dejemos al señor Estrada, porque con él están todos los publicistas argentinos.

La regla general ¿cuál es? Que ha de ser un miembro del poder judicial el que haya de dictar la orden de allanamiento. En los casos de excepción, en estos que no constituyen delito, que son simples contravenciones de orden público, puede llegar á darla el jefe de policía. Tome el código de procedimientos el señor diputado y lea el artículo tal...

Sr. Lacasa—Lo conozco.

Sr. Varela Ortiz—... y ahí encuentra esto instituido por la ley general: que es el jefe de policía, quien tiene jurisdicción judicial exclusiva para el juzgamiento de faltas y contravenciones.

No hace un mes, en una apelación contra la sentencia pronunciada por el jefe de policía en un caso de contravención, acaba de ser reconocido así, expresamente, por el juez de la apelación, el juez correccional. No hay discusión, me parece, á este respecto.

Sr. Lacasa—¿Quién era el juez correccional?

Sr. Varela Ortiz—No sé, señor diputado; pero puedo buscar la sentencia. Le afirmo yo, bajo mi palabra de honor, que así es; y aun cuando no fuera, me bastaría leer el texto del código de procedimientos.

En la provincia de Buenos Aires todavía tendría más asidero la interpretación restrictiva del señor diputado, porque aquella constitución determina que las órdenes de allanamiento serán dadas por orden de juez competente ó autoridad municipal.

¡Pero vea el señor diputado! Aun en presencia de ese artículo, que también regía en la constitución del 53, le voy á traer la opinión del señor Valentín Alsina, gobernador el año 58 en aquella provincia, evacuando una consulta que le hiciera el jefe de policía de aquel entonces. Le contesta textualmente en nota oficial que está en los registros nacionales: «El jefe de policía es autoridad competente para allanar las casas particulares en el ejercicio de sus funciones, ya sea para aprehender criminales» (fíjese bien el señor diputado, por-

que luego he de hacerle notar una cosa, y es la restricción que este artículo establece para que el jefe de policía pueda ordenar inmediatamente el allanamiento) «ó evitar desórdenes ó infracciones á los reglamentos policiales que ocurran en ellas».

Sr. Lacasa—Esa es la opinión del señor Valentín Alsina.

Sr. Varela Ortiz—Del gobernador de la provincia, doctor Valentín Alsina.

Sr. Lacasa—Pues estaba equivocado. (*Risas*).

Sr. Varela Ortiz—Y como aún lo discute voy á poner al señor diputado en presencia de una asamblea legislativa, para que también la declare errónea ó equivocada en sus deliberaciones.

El año 1859, con fecha 20 de agosto, la asamblea, formada por el senado y la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del doctor don Eduardo Costa, tan autoridad de publicista como el señor José Manuel Estrada, y que seguramente participaba de las mismas opiniones de éste, en cuanto á la regla general, dictaba esta ley, que también se encuentra en todos los registros, con un solo artículo: «La autoridad competente de que habla el artículo 160 de la constitución en vigencia, autoridad que, á más de los jueces, puede dar orden escrita para allanar la entrada á la casa de un ciudadano, es, en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de policía.»

Algo más, señor presidente: me bastará referirme á la práctica de esta facultad conferida al jefe de policía, y presentaré un caso práctico á la honorable cámara.

Las casas de juego entran á funcionar á las 10 de la noche. Llega el jefe de policía á la puerta de una de ellas. Se le detiene, exigiéndole la orden de allanamiento. El jefe de policía va en busca de un juez competente. ¿A qué juez va? Al juez correccional, decía el señor diputado.

Sr. Lacasa—El señor diputado lo establece.

Sr. Varela Ortiz—Tomo el juez correccional, porque el señor diputado quería que fuera él quien entendiera en este asunto.

En primer lugar, el juez correccional no tiene horas de oficina de noche. Pero lo encuentra el jefe de policía en su casa, si está en ella; le solicita la orden de allanamiento, y éste le dice: primero, por el artículo tal del código, la orden que yo expida tiene que ser fundada;

segundo, por el artículo 400 del mismo código, las órdenes de allanamiento sólo pueden ser dadas desde la salida hasta la puesta del sol, salvo casos muy determinados, en un artículo que también consigna el código. El juez sigue diciendo: en otro artículo del código de procedimientos se ordena que la orden de allanamiento ha de ser siempre fundada, y he de dar vista al fiscal. Busca al fiscal á las 10 de la noche.

A todo esto la casa de juego sigue funcionando. Dan con el fiscal; pero primero hay que buscar al secretario para que actúe con el juez, si es que lo encuentran en su casa y no está durmiendo. Total, poniendo toda la buena voluntad imaginable, esta orden de allanamiento sería expedida no menos de ocho ó diez horas después; y cuando el jefe de policía llegara á la casa denunciada de garito encontraría que todos se habrían retirado á dormir y no habría nadie jugando.

Creo que sin este artículo quedaría como inútil la sanción de los artículos anteriores.

Sr. Victorica—Pido la palabra.

He pedido la palabra, á pesar de que no había tenido la intención de tomar parte en este debate; pero encuentro, como el señor diputado por Buenos Aires, que este artículo es ofensivo al artículo 18 de la constitución, á la garantía de la inviolabilidad del domicilio. Este artículo dice que el domicilio es inviolable y que una ley especial ha de establecer las condiciones en que puede ser allanado. La ley está dictada: es el código de procedimientos.

El señor diputado que acaba de hablar parece que sólo desease que el jefe de policía sorprendiese las casas en que accidentalmente se juega; pero no son esas las que se debe perseguir, sino aquellas en que habitualmente se juega, en que está establecido un garito, nocturno ó diurno, y para tomar presos á los infractores de la prohibición, á los que tengan establecidos esos garitos, tiene tiempo de sobra la policía para recabar las órdenes de allanamiento de los jueces competentes.

No encuentro en mis recuerdos de la legislación ningún precedente de la disposición que establece el artículo, sino una ley del tiempo de Luis XVI, precisamente sobre el juego. Establecía que podían los comisarios de policía allanar los domicilios en cualquier tiempo, es decir, tanto de día como de noche, en virtud de designación de dos ciudada-

nos domiciliados. Algo más requería Luis XVI de lo que dice este proyecto, que sólo requiere semiplena prueba, difícil de definir; pero fácil de inventar.

Debe evitarse sancionar disposiciones como esta, que pueden dar lugar á violaciones del domicilio, porque ellas pueden ser imitadas en las provincias, y entonces, en las épocas electorales las autoridades policiales harán la vista gorda en las casas del amigo y perseguirán las reuniones en las casas de los enemigos políticos, so pretexto del juego.

Este artículo establece una verdadera opresión al ciudadano, una verdadera violación á la condición más apreciable de la libertad humana, no ya de la libertad del domicilio: el sagrado del hogar. (*Aplausos en la barra*).

Fué precisamente por esa disposición de Luis XVI que la constitución de a revolución puso á su frente que el domicilio era inviolable de noche, y que sólo se podía penetrar en caso de incendio, inundación ó cuando de adentro de la casa se pidiese el auxilio á las autoridades. Así lo consagró la constitución del año 8, me parece, por una disposición terminante; y esta disposición terminante ha sido imitada por nuestro código de procedimientos, que tiene todas las condiciones necesarias para resguardar la libertad individual.

Es por estas razones que voy á dar mi voto en contra de este artículo y en contra del siguiente, que también afecta otra garantía individual establecida en el código de procedimientos. ¿Por qué no se ha de aceptar la caución en caso de arresto de los jugadores? ¿Por qué no se ha de admitir la caución hipotecaria ó la caución prendaria? ¿Por qué se ha de retener preso á ese ciudadano, desde que ofrece la caución que la ley general admite para salir en libertad bajo fianza?

Sr. Barroetaveña—Y que puede ser inocente, que es lo más grave.

Sr. Victorica—Y que puede ser inocente. Pero aunque no lo fuera, puede ser un padre de familia, un industrial honesto, que por extravío haya entrado incidentalmente en una casa de juego y que puede dar la fianza hipotecaria, la fianza de persona de responsabilidad, etc.

En amor á la libertad del ciudadano he de votar contra ese artículo, lo mismo que contra el anterior.

He dicho. (*Aplausos*).

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra. Para reiterar mi argumentación ante-

rior. Este artículo no es nuevo; con él no se atenta al sagrado del hogar, se puede atentar con él á lo inmoral del garito, nunca á lo sagrado del hogar y el señor diputado por la capital...

Sr. Victorica—Pero bastaría una semiplena prueba...

Sr. Varela Ortiz—¡La semiplena prueba! ¡cuando el mismo distinguidísimo señor diputado nos hablaba de la dificultad de probar y de lo fácil de inventar!

Sr. Victorica—Difícil de definir y fácil de inventar, puesto que basta un testigo para que ella exista, cuando Luis XVI exigía dos para que la policía penetrase en un domicilio privado.

Sr. Varela Ortiz—Sin saber ni querer saber lo que exigía Luis XVI, me basta saber lo único que exige nuestro código de procedimientos para constituir en arresto á un ciudadano: la semiplena prueba. Me basta saber que hay capítulos extensos en el código de procedimientos en lo criminal que ponen á merced del juez la libertad y la propiedad por medio de la semiplena prueba hasta tanto se esclarezca completamente el hecho.

Hoy el jefe de policía es el juez de prevención y puede allanar el domicilio. ¿Qué es lo que le da esta ley? Simplemente le extiende la jurisdicción dada por una ley de forma. Si el jefe de policía puede mandar allanar en épocas electorales, que son los casos temidos por el señor diputado por la capital, el domicilio de un ciudadano, inventando que en el seno de su hogar se ha cometido una contravención de orden público, ¿por qué no propone el señor diputado la derogación del artículo 28 del código de procedimientos?

Sr. Victorica—Por una contravención no va á allanar el domicilio privado en la noche el jefe de policía. No lo hará porque encontrará la resistencia de toda la población.

Sr. Varela Ortiz—Eso es ya otra cosa. Eso cambia la faz de la cuestión.

El señor diputado ya no teme el abuso y el avance del jefe de policía; ya no teme que el domicilio sea allanado ó violado y su sagrado expuesto al vandalismo de la tropa que lleve; el inconveniente que encuentra el señor diputado es que con esto se va á salir de las reglas del allanamiento, haciéndolo en las horas de la noche.

¡Pero si también el código de procedimientos que tengo á la vista lo autoriza en determinados casos y no hay una

sola orden de allanamiento de las dadas por los jueces de instrucción que no se cumplimente de noche, cuando es necesario. ¿Por qué? Porque no hay autoridad del orden judicial ó administrativo que conociendo las responsabilidades de que es pasible tenga la audacia de dictarla para cometer un atropello.

En este artículo, señor presidente, he empezado á decir, no se ataca el sagrado del hogar, y sí lo inmoral del garito.

¿Cómo está redactado el artículo? «El jefe de policía, dice, someterá al juzgamiento de los jueces correccionales á los infractores de la presente ley; y munidos de órdenes suscriptas por él, los funcionarios de policía podrán penetrar á las casas en que se verifiquen juegos de azar, se vendan ó se ofrezcan en venta billetes de loterías no autorizadas ó se celebren apuestas, ó vendan boletos de sport, toda vez que existiera la semiplena prueba de que en ella se infringen las disposiciones de esta ley y al sólo objeto de constituir en arresto á los contraventores y verificar el secuestro á que se refiere el artículo 4.º»

Al sólo objeto de constituir en arresto, dice el artículo. Téngase bien presente que restringe las facultades hoy por hoy, que por el código de procedimientos tiene el jefe de policía para constituir en arresto; es decir, hoy el jefe de policía, en virtud de atribuciones que le son dadas por el código de procedimientos, á pretexto de que en una casa se ha cometido una infracción de orden público, puede allanar el domicilio y con ese pretexto aprehender á un reo de otro delito que se encuentre allí; mientras que por esta ley no se puede hacer eso. Sólo puede entrar á efecto de constituir en arresto al infractor de la ley y secuestrar los objetos que han servido para el juego.

Tengo, señor presidente, convicción hecha, á pesar del profundo respeto que me inspira la autorizadísima opinión del señor diputado por la capital, de que el artículo de esta ley no ataca lo sagrado del hogar, que no afecta á la libertad de los ciudadanos, que ni siquiera pone en desamparo momentáneo á la gente de bien en la sociedad.

Creo que sin este artículo todo lo que hemos acabado de legislar contra los profesionales del juego, del extravío, será perfectamente inútil, será prácticamente irrealizable.

Le invito al señor diputado á que me

diga cómo, dentro de las formalidades del código actual, podrá el juez correccional librar una orden de allanamiento.

Dice el señor diputado: Las disposiciones de este proyecto son de aplicación para las casas donde habitualmente se juega.

Pero para una casa en que se va á jugar mañana, ¿cómo va á dar la orden de allanamiento el juez correccional? Porque al juez correccional, para librar una orden de allanamiento, el código le impone que ha de ser fundada; tiene que cerciorarse de que, en efecto, en esa casa que manda allanar se está jugando; y como en el mandamiento tiene que decirse calle, número, etc., cuando viene la orden de allanamiento la casa se ha mudado á la vereda de enfrente, y se sigue jugando. El allanamiento es imposible y resulta irrisoria, absolutamente irrisoria, la actitud de la policía para perseguir el juego.

Le pido disculpa al señor diputado por haberme tomado la libertad de sentir con él en esta opinión, pero entiendo que en la cámara el asiento obliga, y que no hay autoridades mayores ni menores en materias como esta, cuyo estudio es posible á todos los esfuerzos y á todas las inteligencias.

Sr. Victorica—Pido la palabra.

He pedido precisamente la vigencia de la ley de procedimientos en esta materia: que no fuesen los jugadores puestos fuera de esta ley común, porque no había necesidad de ello.

Me invita el señor diputado á que diga cómo podrá practicarse el allanamiento.

Efectivamente: esas casas viajeras, trashumantes, no es posible perseguirlas de esta manera. Pero recordaré al señor diputado, volviendo aunque sea una majadería, al ejemplo de Luis XVI, que en esa disposición arbitraria y opresora se dice: «las casas en que habitualmente se juega». Los garitos son las casas en que habitualmente se juega. Las casas que debe perseguir esta ley son los garitos y nó los juegos en los domicilios.

A la policía le es fácil saber dónde están los garitos, para denunciarlos al juez, con pruebas ó con bastantes indicios, á fin de que el juez dé la orden de allanamiento.

Sr. Ugarriza—Pido la palabra.

Estoy convencido de que esta cuestión ha sido exagerada en principio.

Efectivamente, todas las constituciones han defendido el hogar bajo un prin-

cipio supersticioso. De ahí ha resultado un hecho que todos palpamos. El domicilio ha sido inviolable por las leyes, pero ha sido completamente violado en la práctica por todas las autoridades.

Las constituciones locales han consagrado realmente en las provincias casi siempre que es inviolable, sin una explicación; y sólo la constitución nacional ha establecido un principio práctico tal como debe entenderse.

La constitución dice: el domicilio es inviolable y una ley reglamentará el modo y la forma con que puede allanarse.

Entonces, la mayor garantía que tiene un ciudadano es que no puede ser invadido arbitrariamente sino con un fin y propósito que una ley ha determinado, obedeciendo á razones de orden público. Y, en este sentido, veamos lo que pasa en el orden judicial. Los papeles del fallido, las cartas que tiene un delincuente en el correo, no gozan de las garantías establecidas por la constitución; el juez los toma y los examina y, sin embargo, seguimos diciéndolo: la correspondencia es inviolable, sin decir de qué manera práctica es inviolable. Porque las garantías de la constitución son reglamentadas por la ley, en la que se establece los casos de excepción al principio consignado en la ley fundamental.

De ahí que, aun sin tratarse de delitos, se allane el domicilio de un fallido para recoger sus libros y documentos, de orden de un juez de comercio, de un juez que no es juez nacional encargado especialmente de interpretar la constitución.

Sobre este artículo encuentro yo una resolución muy temprana en la corte, la que se registra en el tomo 17, página 22, y que dice textualmente lo siguiente:

«Las garantías constitucionales acordadas por el artículo 18 de la constitución, no sufren menoscabo por la alteración que ocurra en las jurisdicciones establecidas, atribuyendo á nuevos tribunales permanentes ciertos géneros de causas de que antes conocían otros cuya jurisdicción se suprime ó se restringe.»

La razón fundamental la da la misma resolución, y dice: «La interpretación contraria serviría muchas veces de obstáculo á toda mejora en esta materia, obligando á conservar magistrados y jurisdicciones dignas de supresión ó de reforma.»

De manera que si anteriormente no

se ha atribuido á la policía la facultad de allanar los domicilios, es porque no se ha dado una ley fundamental para suprimir el juego.

Hoy nos encontramos en la mesa con esta cuestión: el juego es un vicio social que es necesario suprimirlo. Se ha discutido los puntos y se resuelve que es un mal social que es necesario combatir en estos momentos. Entonces, la ley que provee á su supresión, no puede dejar de proveer el medio único de suprimirlo, que es el allanamiento por medio de la policía. Se trata de una jurisdicción que hasta ahora ha pertenecido á los jueces federales ó de la capital y que hoy se da á la policía, porque una necesidad así lo impone.

Y como la policía tiene su parte de poder judicial, desde que también es un juez, bien puede ser encargada de esta misión sagrada y de confianza.

La policía juzga las contravenciones, y más que esto, ¿qué facultad enorme le hemos dado á la policía encomendándole que haga los sumarios? En todos los casos de delitos es la policía la que hace las primeras diligencias, inicia los sumarios, que constituyen el principio de los juicios criminales; es la policía la que interviene, la que se apodera de los instrumentos del delito, la que da al juez la raíz del proceso, y todo lo que hace el juez está basado sobre los antecedentes que le ha suministrado la policía.

Hemos vivido bajo este régimen y nosotros encontramos atacados en nuestra libertad.

Se me ocurre también el abuso que podría hacer la autoridad. Pero los jueces también pueden abusar; no es la cuestión que se pueda decir: un juez ó un jefe de policía, en un momento de elecciones, puede atropellar las casas, porque si hay la resolución de atropellar las casas, las atropellan de todos modos, salvo la responsabilidad que tanto en el caso del juez como del jefe de policía la ley ha colocado como consecuencia del abuso. Esa no es la cuestión; la cuestión es que la responsabilidad vendrá inmediatamente, porque se sabe que el jefe de policía no puede allanar los domicilios sino para tales ó cuales objetos; si abusa, si comete atropellos contra el domicilio, vendrá el remedio después de juzgado el caso. Así es que yo no encuentro escrúpulos á este respecto. (*Muy bien!*)

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Me parece que el señor diputado por

la capital, general Victorica, al recordar el caso de Luis XVI, ha olvidado no sólo la actual legislación de Francia, igual á la que proponemos, sino este dato histórico de importancia también: que para aquel poder no existía, ni lo que llamamos el reinado de la ley ó el imperio de la ley, que ha reemplazado á aquellas personas, ni existía la responsabilidad absoluta del juez, que es aquella sobre que reposa el derecho inglés y la libertad inglesa.

No tengo nada más que decir para insistir en que se vote el artículo 9º, sin el cual esta ley sería un fracaso, y que no lesiona ningún artículo constitucional.

Sr. Barroetaveña—Pido la palabra.

Voy á decir pocas en oposición al artículo en debate y para rectificar algunas de las palabras que se han vertido sosteniéndolo.

El señor diputado por Salta nos hablaba de que el jefe de policía era el que procedía al arresto y allanamiento en los procesos criminales.

Es exacto. Pero olvidaba decir que no lo hacía sino en virtud del auto del juez que instruye el sumario ó proceso. De manera que la prisión de los procesados y el allanamiento de sus domicilios se hace por autoridad de juez competente.

Quando se habla de que esta ley va á fracasar si se entrega á los jueces naturales el dictar los autos de allanamiento ó de arresto porque los jefes de casas de *sport* ó de juego, ó los jugadores tienen sus agentes, en vigilancia, en la sala de despacho de todos los jueces, se me ocurre que esto prueba demasiado, puesto que ¿por qué no tendrían esos mismos agentes en la sala de despacho del jefe de policía, para conocer las órdenes de arresto que se dictaran?

Entonces, si están tan multiplicados los agentes de las casas de juego para impedir que los jueces ordenen su prisión, creo que va á ser ineficaz, en la práctica, el dar esa autoridad arbitraria al jefe de policía. Me parece, pues, que, ya que los autos de prisión y allanamientos de domicilio—garantías constitucionales muy delicadas, que conviene conservar con el mayor cuidado,—ya que esto está confiado á los magistrados, es bueno no extender aquella facultad de allanamiento que estatuye el código de procedimientos al jefe de policía, tratándose de contravenciones ó cualquier falta ó delincuencia. Conviene tener presente que el jefe de policía es un agente infe-

rrior del presidente de la República, del poder ejecutivo, á quien la constitución prohíbe, en los términos más categóricos, ejercer en ningún caso funciones judiciales.

Si no puede hacerlo el jefe del estado, no es bueno extender ó ampliar, á lo menos, los casos á los inferiores del presidente de la República. Si en ningún caso puede ejercer funciones judiciales el presidente de la República, no es bueno dárseles á sus empleados policiales inferiores para ejecutar prisiones ó allanamientos. (*¡Muy bien!*)

Sr. Argerich—Aquí, se trata simplemente de detener, de seguridad, de prevención.

Sr. Varela Ortiz—Pido la palabra.

Nada más que para agregar este argumento, á fin de destruir lo que el señor diputado acaba de decir en este momento.

¡Si el código ya lo ha hecho juez al jefe de policía!

Sr. Barroetaveña—Para faltas simples. No conviene ampliar esa facultad.

Sr. Varela Ortiz—La situación presente resultaría siendo esta: que el jefe de policía puede hoy allanar los garitos por orden dictada por él, por cuanto hoy da esas órdenes de allanamiento dentro de esta escala de penas: treinta días de arresto ó cien pesos de multa.

Por el solo hecho de que nosotros acabamos de modificar la penalidad del juego, resultaría que el jefe de policía ya no puede hacer lo que hoy está haciendo.

Sr. Lacasa—Cambia la jurisdicción, cambia el juez.

Sr. Varela Ortiz—Pero si el peligro no se ha producido hasta el momento presente, ¿ha de producirse ahora nada más que por haber aumentado la pena?

Otro argumento: se trata de un empleado inferior, subalterno del presidente de la República, dice el señor diputado. No hay tal.

El jefe de policía no es un empleado inferior ni subalterno. Es un alto funcionario de la administración pública al cual el mismo código de procedimientos le da funciones judiciales y le confiere jurisdicción de juzgamiento. Sabe el señor diputado perfectamente bien, porque ha intervenido en nuestras luchas electorales,—él es el que tuvo la oportunidad de hacer el discurso en la cancha de pelota, y desde entonces hasta ahora es un viejo luchador por las libertades públicas,—sabe el señor diputado, digo,

que el gran instrumento de política electoral en la capital no es el jefe de policía. ¿Quién es? Los jueces de paz, los suplentes y los alcaldes. Ahí tiene inferior, de lo más inferior, de la última inferioridad. Y bien; hay ciento cincuenta jueces legos en la capital, entre jueces de paz, suplentes y alcaldes, que dan órdenes de allanamiento de domicilios á destajo y nada más que porque son jueces. (*¡Muy bien!*) Esa es la situación de hoy. ¿Por qué razón se ha de temer que el jefe de policía, que, por lo general, es un funcionario respetuoso y respetable, cometa esas tropelías, que tanto se temen?

Sr. Barroetaveña—Pero que puede no serlo. Y el presidente de la República, ¿acaso no es respetuoso y respetable, y sin embargo la constitución no le permite dictar órdenes de allanamiento, porque tiene el mando de las fuerzas armadas de la nación?

Sr. Varela Ortiz—Pero puede no serlo. Puede darse el caso, muy improbable, por cierto, de que el jefe del estado confiera funciones tan delicadas, como son aquellas conferidas al ciudadano que tiene por misión velar de inmediato sobre la vida de las personas y por la seguridad de las propiedades, á un ente insignificante ó á un arbitrario vulgar. Caso, sin duda, muy poco probable. Pero aun en el supuesto de que así sucediera, ¿acaso las leyes penales de nuestro país están tan desprovistas, hechas tan á la ligera, que no hayan previsto el caso de que un funcionario público cometa una arbitrariedad allanando un domicilio fuera de los casos establecidos por la ley? Si comete el delito de abuso de autoridad, es pasible de una pena fuerte. Hubiera ocurrido un solo caso, y ese funcionario habría sido condenado y destituido de su empleo.

Si el extravío de un jefe del estado hubiese confiado, pues, estas funciones á un ente insignificante ó á un arbitrario vulgar, habríamos tenido que traerlo al cumplimiento de las leyes ú obligarle el cambio de ese funcionario por otro más digno de esas funciones sociales y de las garantías que la constitución da á todos los habitantes de la nación.

He dicho.

Sr. Carlés—Pido la palabra.

Nada más que para fundar mi voto y animado por otro compañero de la comisión de negocios constitucionales.

Científicamente estudiada la penalidad de que habla la constitución, hay tres

clases de denominaciones: el crimen, el delito y la contravención; el crimen es contra la patria; el delito contra las personas; la contravención contra el orden público. Para cada una de esas denominaciones hay una autoridad determinada. Para el crimen, el juicio político; para el delito, el juez; para la contravención, el jefe de policía.

Cada una de estas autoridades está investida con una majestad especial por la ley. El crimen es la suprema ofensa al supremo poder y requiere la suprema justicia. El delito es una falta igualmente punible, pero de un carácter inferior: aparece el juez; en la contravención, de carácter general, subordinada á la autoridad dependiente pura y exclusivamente de un poder: el ejecutivo. Para garantizar, pues, los derechos establecidos en la constitución, la constitución misma ha marcado una autoridad que sea la expresión de la representación popular: el juez, propuesto por el poder ejecutivo y con sanción del senado.

Ahora bien, desde el momento que se establece en la misma ley una pena que corresponde al delito del juego vedado, porque se castiga con doscientos pesos de multa ó un año de arresto, no corresponde á los jefes de policía, jueces de contravenciones. Es necesario dar la garantía de justicia que especialmente establece la constitución para los delitos contra derechos.

Si por excepción de la ley se establece que sea el jefe de policía quien se encargue de aplicar estas penas, ya nos oponemos al concepto de delito según la ciencia.

Sr. Varela Ortiz—Se sujetará al juzgamiento de los jueces correccionales.

Sr. Carlés—Ahora estamos impugnando el artículo 7.º que autoriza al jefe de policía á allanar domicilios por delitos y nó contravenciones.

Sr. Argerich—No es un delito.

Sr. Carlés—Pero los delitos no se definen sólo por el hecho que los constituyen, sino por el castigo que merecen y por el sometimiento del reo al juez.

Por eso creo que desde que se toca la constitución, son las autoridades de la constitución las encargadas de ampararlo.

Por eso voy á votar en contra del artículo.

Sr. Lacasa—Pido que se vote por partes hasta las palabras «subscriptas por», pues voy á proponer que sean los mismos jueces quienes dicten las órdenes de allanamiento.

—Se vota por partes el artículo, y es aprobado en la forma propuesta por la comisión.

—En discusión el artículo 10.

Sr. Gigena—Pido la palabra.

Voy á proponer una modificación á este artículo, y la voy á fundar muy brevemente.

Creo que no es justo que á estos contraventores se les prive de una prerrogativa acordada á personas sujetas á mayor pena.

Este artículo ha sido ya propuesto otra vez en el seno de esta cámara cuando se debatió el proyecto de la lotería de beneficencia nacional, actualmente en vigencia, y fué rechazado en definitiva por esta misma cámara cuando vino el proyecto en revisión.

Considero que el artículo en discusión es importante para hacer eficaces las disposiciones establecidas en el resto de la ley; pero también creo que es un exceso no conceder, como he dicho antes, la libertad bajo fianza.

A objeto de salvar este inconveniente propongo la siguiente modificación: «Los infractores á la presente ley sólo podrán acogerse á los beneficios de la libertad provisoria establecida por el código de procedimientos en lo criminal dando caución real, á cuyo efecto el juez no dará curso á ningún pedido de excarcelación sin el depósito de una suma de dinero igual al máximo de la multa correspondiente á la pena en que haya incurrido.»

Me pongo en este caso, señor presidente: que se tome á un infractor á esta ley, como se ha dicho anteriormente, que se encuentre en una casa de juego por cualquier circunstancia. Es indudable que el solo hecho de hallarse en esa casa no lo constituye en reo de un delito; puede justificar posteriormente que debido á una casualidad se encontraba allí, y que él no sabía que era una casa de juego.

Ahora bien; este señor, que puede resultar inocente, no tiene derecho á ser excarcelado bajo fianza, y entonces se encuentra en peores condiciones que el que atenta contra la vida de otra persona disparando armas de fuego, para el cual existe excarcelación. No creo que exista el peligro actual, de que una vez obtenida la excarcelación el juicio quede paralizado y nunca concluya, y no hay ese peligro porque el mismo interesado ó un tercero será el que hará el depósito real, en el establecimiento

que corresponda, á la orden del juez para responder á la pena que le pueda tocar en definitiva.

De manera que creo que con este procedimiento se salvaría la dificultad.

Si la comisión no aceptara el agregado que propongo, pediría que fuera votado en caso de ser rechazado el artículo propuesto por la comisión.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

La mayoría de la comisión acepta el artículo; pero quiero salvar con relación á este precepto mi opinión personal, ya comprometida en ocasiones. Se me va á permitir, pues, decir dos palabras al respecto.

Cuando se trató de la ley de marcas de fábrica y de comercio, en esta misma banca el exdiputado doctor Daract pronunció un discurso fundado sobre la materia. Hace un momento no he querido rectificar lo que considero un error—puede ser que el equivocado sea yo—: las opiniones de mi distinguido colega por Santa Fe acerca de la clasificación penal de los crímenes, delitos y contravenciones. No he de entrar tampoco á estudiar la división tripartita, que tan admirablemente ha estudiado Tarde.

Sr. Carlés—Dentro de nuestra constitución.

Sr. Argerich—Dentro de nuestra constitución no existe una reglamentación de la ley acerca de cuáles son los crímenes, los delitos y las contravenciones; y yo no puedo dejar la sanción de esta ley bajo la impresión de que dejamos establecido que se trata de un delito del punto de vista del derecho criminal: es una contravención especial de policía, de carácter y naturaleza algo distintas á las que caracterizan los crímenes y los delitos.

El precepto tal cual lo acabo de admitir en nombre de la mayoría de la comisión, acerca del cual salvo mi opinión personal, establece la excepción odiosa en beneficio del rico y en perjuicio del que no está en condiciones de fortuna para competir con él y sobre el que cae todo el rigor de la ley.

El artículo tal como lo ha propuesto la comisión de códigos es un precepto que descansa en la base de la más absoluta igualdad, sin desigualdades de fortuna, que establecen odiosidades entre los hombres.

Yo salvo mi opinión personal, aunque exponga la decisión de la mayoría.

Sr. Carlés—Dentro de la economía de la constitución hay tres denomina-

ciones: el artículo 29 habla de crímenes, el artículo 45 de delitos, el artículo 67, inciso 11, de contravenciones.

No es una división perfectamente científica, pero sí perfectamente conforme con los tiempos en que se dictaba esta constitución, en que predominaba un espíritu clásico en materia de delincuencia.

Sr. Argerich—No es el criterio de los positivistas.

Sr. Carlés—Positivista, sí, señor; como es el criterio del señor diputado, muy conveniente y oportuno para los tiempos actuales. En aquellas épocas no se conocía á Spencer, á Ferri y á Garófalo.

Sr. Vedia—Ni á Tarde.

Sr. Barroetaveña—Pido la palabra.

Me voy á oponer al artículo 10, exponiendo muy brevemente á la honorable cámara las consideraciones que tuve el honor de exponer otra vez, para que fuera rechazado un artículo idéntico.

Prescindiendo de las denominaciones de la constitución y de las clasificaciones de la delincuencia, no encuentro razones de orden legal ni de ninguna otra clase que autoricen á poner en condiciones más desventajosas ante la ley de excarcelación bajo fianza, á los jugadores que á los delincentes comunes.

De los discursos pronunciados en esta sesión, se saca en consecuencia que el juego prohibido más que un delito es una falta, una debilidad, una pasión. Como muy bien lo precisaba el señor diputado por la capital, general Victorica, los complicados ó procesados en este género de causas pueden ser padres de familia, hombres distinguidos é industriales que, por una debilidad, accidente ó extravío se ven complicados en un círculo de juego. Y yo digo: esa infracción ó delincuencia ¿es más repulsiva, es más grave que los delitos comunes, que merecen hasta tres años de prisión y para los cuales la ley permite la excarcelación bajo fianza?

¿Cuáles son los propósitos principales de la prisión preventiva? Sabido es, señor presidente, que son asegurar la ejecución de la pena, la responsabilidad civil del inculcado y evitar á la sociedad la inmoralidad de que anden en libertad los agentes de un delito grave ó atroz. Pero tratándose de infractores de una ley de juegos prohibidos, no se trata de un delincuente grave ni tampoco los beneficios de la excarcelación bajo fianza van á hacer ilusoria la condena del juez. En defini-

tiva, concluido el proceso, queda terminada la causa contra el jugador con la condena á una multa, ó á un arresto, primero, ó las dos cosas conjuntamente en caso de reincidencia. Si el inculcado está excarcelado tiene la garantía ó fianza correspondiente y el cumplimiento de la pena está asegurado.

Si está asegurado, pues, el objetivo de la instrucción criminal, ¿por qué ensañarse contra este delincuente, que más que odio merece lástima, poniéndole á un nivel peor que el de los criminales, muchos de los cuales son repulsivos por sus actos?

De manera que desearía que se conservara para los jugadores delincentes ó infractores de la ley que estamos sancionando la misma garantía de excarcelación bajo fianza que está establecida para los delincentes comunes que tienen la misma penalidad.

Estoy en contra también del final del artículo, que agrava la penalidad con la incapacidad para ocupar puestos públicos durante cierto tiempo.

Desde luego, esa incapacidad no existe para los delincentes comunes que merecen pena hasta de tres años, y no veo, por consiguiente, la razón para que se agrave la situación de esta clase de delincentes con la incapacidad mencionada, con todos los perjuicios inherentes al tiempo de detención durante el proceso, mucho más si, como sucede con frecuencia, resulta inocente el encausado.

Sr. Argerich—Si es inocente no será condenado.

Sr. Barroetaveña—Pero ha sufrido el tiempo de la prisión preventiva durante la sustanciación del proceso; mientras que acordando los beneficios de la excarcelación bajo fianza se garantiza la libertad real é inmediata de los que más tarde pueden resultar inocentes.

De manera que estando garantida por la ley de excarcelación bajo fianza la ejecución de la pena y el resarcimiento del daño que hubiera causado el delincuente, no encuentro razón ninguna que autorice á privarle del beneficio de la excarcelación bajo fianza ni tampoco que autorice la inhabilitación de ejercer cargos públicos.

Sr. Argerich—Pido la palabra.

Me permito hacer presente que esta forma de precepto que se propone importa derogar los que rigen en la generalidad de los casos la excarcelación bajo fianza, en el código de pro-

Junio 9 de 1902

CÁMARA DE DIPUTADOS

11.ª sesión ordinaria

cedimientos criminales, desde que la fianza no sólo responde á la multa sino á las costas del proceso, y entonces si se aceptase el artículo de esa manera, mejor sería suprimir todo el agregado relativo al importe, diciendo que la fianza será fijada por el juez, en el caso de que se acepte el procedimiento de la fianza.

Sr. Sánchez de Bustamante—En esa forma limitada, acepto.

Sr. Varela Ortiz—Por mi parte, he de votar cualquiera de las dos formas. Si el artículo de la comisión fuera rechazado, se podría poner á votación el propuesto por el señor diputado, porque producirá en la práctica los mismos resultados, igualmente buenos.

—Se vota el artículo propuesto por la comisión, y resulta negativa.

Sr. Presidente—Ahora se votará el que se ha propuesto en substitución del rechazado.

Sr. Sánchez de Bustamante—Pido que se vote por partes.

—Se vota: «Los infractores de la presente ley sólo podrán acogerse á los beneficios de la libertad provisoria establecida en el código de procedimientos en lo criminal dando caución real», y resulta afirmativa.

—Se vota: «y si el infractor fuese empleado público sufrirá, además, la pérdida del empleo é inhabilitación por tres años para ocupar puestos públicos», y resulta afirmativa de 34 votos.

—Se aprueba el resto del proyecto.

Sr. Presidente—Queda levantada la sesión.

—Son las 6 y 40 p. m.